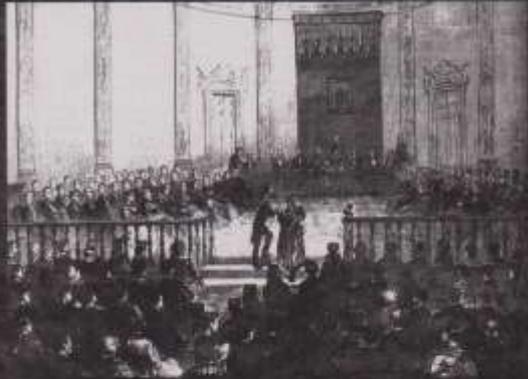


Lecciones del final del fujimorismo

Jane Marcus-Delgado
Martín Tanaka



Colección *mínima*

Lecciones del final del fujimorismo

Lecciones del final del fujimorismo

**LA LEGITIMIDAD PRESIDENCIAL Y LA
ACCIÓN POLÍTICA**

**Jane Marcus-Delgado
Martín Tanaka**

© Instituto de Estudios Peruanos, IEP
Horacio Urteaga 694, Lima 11
☎ [511] 332-6194/424-4856
Fax: 332-6173
E-mail: librería@iep.org.pe

ISBN 9972-51-062-X
ISSN 1019-4479

Impreso en el Perú
1ra. edición, noviembre 2001
1000 ejemplares

Hecho el depósito legal: 1501162001-4229

Diseño de carátula: *Gabriela de Amat*

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
EL FIN DE ALBERTO FUJIMORI: UN ESTUDIO DE LEGITIMIDAD PRESIDENCIAL	
JANE MARCUS-DELGADO	9
¿CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA? DETERMINISMO, VOLUNTARISMO, ACTORES Y PODERES ESTRUCTURALES EN EL PERÚ, 1980-2000	
MARTIN TANAKA	57

MARCUS-DELGADO, JANE

Lecciones del final del fujimorismo: la legitimidad presidencial y la acción política / Jane Marcus-Delgado y Martín Tanaka.-- Lima: IEP, 2001. (Colección Mínima, 47)

FUJIMORI, ALBERTO/PODER POLÍTICO/SISTEMAS
POLÍTICOS /ANÁLISIS POLÍTICO/DEMOCRACIA/
POLÍTICA /PERÚ

W/05.01.01/M/47

PRESENTACIÓN

***E**l rápido derrumbe del régimen de Alberto Fujimori en el Perú, en el segundo semestre del año 2000, ha dado abundante y sustanciosa materia prima para el análisis social y político. Un suceso de semejante trascendencia, que ha contado además con ingredientes en sí mismos llamativos (como la acción de un maquiavélico y todopoderoso asesor en la sombra, la participación de destacadas figuras de la farándula y los medios de comunicación en los turbios manejos gubernamentales, la huida del Presidente mientras aún ostentaba el cargo, al lejanísimo país de sus ancestros, donde reivindicó y obtuvo la nacionalidad), puede servir, a través de un detenido y desapasionado análisis, para comprender mejor la política y la sociedad peruanas de las últimas décadas del siglo veinte.*

Es precisamente con ese ánimo que el Instituto de Estudios Peruanos ha venido publicando, desde el mes de diciembre del año 2000, varios trabajos que evalúan desde distintos ángulos el desmoronamiento del régimen que gobernó el país a lo largo de diez intensos y prolongados años. El presente libro se suma a este esfuerzo, reuniendo los estudios de dos jóvenes sociólogos, vinculados de distinta manera a nuestro instituto.

En el primero de los ensayos, Jane Marcus-Delgado, profesora en el College of Staten Island de la Universidad de la Ciudad

de Nueva York y anteriormente investigadora afiliada al IEP, examina la evolución de la legitimidad del gobierno de Alberto Fujimori como resultado de su interacción con las fuerzas internas y externas. Su reflexión recae sobre todo en estas últimas, revisando especialmente el papel cumplido por los Estados Unidos.

En el segundo, Martín Tanaka, investigador del IEP, se sumerge en el análisis del conjunto del sistema político emergido en el Perú tras el final del gobierno militar, en 1980. Cuestiona las interpretaciones más en boga acerca del proceso político de estas dos décadas, destacando, más que el peso de las estructuras históricas, el rol clave de la conducta de los actores, en un interesante ejercicio de argumentación contrafactual (preguntarse: ¿que hubiera pasado de no haberse hecho talo cual cosa?).

Se trata así de enfoques distintos; en cierto modo complementarios, pero, en otro, también con más de un punto de controversia. Cada uno de los autores selecciona e interpreta los hechos desde su particular perspectiva, y concibe su desencadenamiento sobre la base de diversos móviles, estructuras y circunstancias. Ello no hace más que enriquecer el debate y nuestros conocimientos en tomo a una de las coyunturas más decisivas de la historia política del Perú, cual es el propósito con que entregamos este pequeño volumen a la crítica de los lectores.

Instituto de Estudios Peruanos
Dirección de Publicaciones

EL FIN DE ALBERTO FUJIMORI: UN ESTUDIO DE LEGITIMIDAD PRESIDENCIAL*

JANE MARCUS-DELGADO¹

Alberto Fujimori, Presidente del Perú en el período 1990-2000, salió del escenario político tan rápida e inesperadamente como había entrado una década atrás. Un "outsider" político, el inexperto Fujimori asumió la presidencia sin un partido político que lo respaldara, sin tener una mayoría en el Congreso, con un electorado no organizado y en contra de los deseos de las elites industriales y de los empresarios peruanos. Sin embargo, durante sus diez años en el poder se las arregló para alcanzar varias transformaciones destacables en la economía política de la nación. A pesar de aplicar uno de los programas neo liberales de shock más severos de toda la región, Fujimori mantuvo altos índices de popularidad a lo largo de su presidencia. ¿Por qué, entonces, Fujimori huyó del Perú en noviembre del 2000, enviando por fax su renuncia desde Japón? Este estudio examina el concepto de la legitimidad presidencial, cómo se construye y mantiene, y cómo y por qué

* Traducción de Aída Nagata.

¹ Jane Marcus- Delgado es Profesor Asistente del College of Staten Island, 2S 101 City University of New York, 2800 Victory Boulevard Staten Island, New York 10314, marcus@postbox.csi.cuny.edu. La investigación fue patrocinada por una beca del Professional Staff Congress de la City University of New York.

colapsa. Analiza el complicado juego entre el ejecutivo y las fuerzas externas e internas, afirmando que la dinámica de estas interacciones forma las bases que determinan la legitimidad.

El 19 de noviembre del 2000, el presidente del Congreso del Perú, Valentín Paniagua, recibió un fax desde Tokio. El mensaje era simple: Alberto Fujimori (1990-2000) renunciaba a la presidencia. Después de diez años en el cargo y tres exitosas, aunque controvertidas elecciones, el enigmático líder salía de la política tan repentina y sorpresivamente como había entrado una década atrás.

A primera vista, tanto la aparición como desaparición política de Fujimori parecen ser triunfos de la democracia popular. Su llegada al poder estuvo anunciada como una respuesta a la desintegración de los partidos políticos elitistas y tradicionales —él representaba a los inmigrantes, a los sectores oprimidos, marginados y olvidados de la población peruana. Y su salida no fue menos auspiciosa, ya que aparentemente fue una respuesta a años de marchas, protestas y otras expresiones de descontento de muchas personas, tanto en el foro nacional como en el internacional. Pero, ¿por qué las fuerzas de la democracia triunfaron súbitamente en noviembre del 2000, cuando no habían tenido éxito en destituir al Presidente en otros momentos de desafío a su autoridad?

En el 2000, Fujimori había alcanzado la dudosa distinción de ser el Jefe de Estado elegido, con mayor duración del hemisferio. Su impunidad autoritaria se desarrolló exponencialmente durante la década; a poco menos de un mes de su asunción al poder, impuso el "fujishock", paquete económico llevado a cabo con el respaldo de tanques y tropas en las calles de Lima. Dos años después disolvió el Congreso e intervino en sus instituciones democráticas mediante un "autogolpe". En 1995, nuevamente accedió al poder después de maniobrar un cambio en la Constitución que permitía su reelección. En 1997 se rehusó, desafiadamente, a reunirse con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), cuando sus

miembros llegaron en masa al Palacio de Gobierno para protestar contra su política. En 1999, retiró al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuando ésta se preparaba a fallar en contra de su gobierno. Finalmente, en el 2000, desplegó descaradamente a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para manipular fraudulentamente su reelección. Y estos son sólo unos pocos ejemplos de una larga lista de abusos de los derechos humanos, destituciones, hostilidades arbitrarias de funcionarios del gobierno y caprichosas maneras de legislar por decreto. Estos fracasos ni siquiera fueron compensados con éxitos económicos: hasta el 2000, el país había sufrido una recesión de cuatro años y el número de peruanos viviendo en situación de extrema pobreza había aumentado.

La explicación, puesta sucintamente, fue que en diez años Fujimori se las arregló para institucionalizar su régimen. Debilitó con éxito una oposición ya débil, reestructuró el gobierno para concentrar el poder político y los recursos del Estado en el Poder Ejecutivo, estableció una base de apoyo leal entre los votantes más pobres del Perú y demostró una flagrante indiferencia a las protestas y recriminaciones. Con un índice de aprobación de más del 50% después de las elecciones del 2000, Fujimori parecía imparable cuando empezó su tercer mandato (Apoyo Opinión y Mercado).²

Este artículo examina la caída de Fujimori. Explora los factores que le permitieron mantener su legitimidad política hasta el final de su régimen y analiza la confluencia de eventos y circunstancias que lo derrotaron. El estudio también examina el acto de equilibrio que Fujimori, al igual que otros líderes de países pobres, tuvo que llevar a cabo: sopesar la autoridad constantemente otorgada y retirada por los votantes, contra el tenue apoyo de la comunidad internacional. A lo largo de sus años en el poder, Fujimori obtuvo fuertes índices de aproba-

2 Como se describirá más adelante, esta cifra es engañosa. Es importante desagregar a aquellos que todavía respaldaban al Presidente en ese momento, para entender la calidad —en vez de la cantidad— de su apoyo.

ción entre sus electores, empleando una combinación de tácticas que incluyeron la manipulación de los medios de comunicación, el uso de los recursos del Estado para dirigir estratégicamente el gasto hacia proyectos de obras públicas y el despliegue antidemocrático del ejército y de los servicios de inteligencia para sus fines políticos. En suma, el Presidente utilizó muchas de las tácticas usadas por los líderes autoritarios a lo largo del siglo XX.

Como muchos de sus predecesores dictatoriales, Fujimori se mantuvo en el poder restringiendo al máximo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su administración encaró numerosas acusaciones de violaciones de derechos humanos y abusos de poder tanto dentro del Perú como en el extranjero; hasta su caída, lo pudo contrarrestar con éxito invocando al Poder Legislativo, haciendo gestos "democráticos" gratuitos o silenciando a sus críticos a través de amenazas, de sanciones o del exilio. Fujimori fue capaz de mantener el equilibrio en esta cuerda floja diplomática hasta el final de la década, cuando sus flagrantes actos de corrupción y actividades ilegales —especialmente los de su cercano asesor, el jefe no oficial del SIN, Vladimiro Montesinos— inclinaron el delicado balance de su legitimidad, provocando que se viniera abajo.

Reflexionar sobre las fallas del presidente Fujimori esclarece los principales obstáculos para la democratización en el Perú; casi todos ellos lo preceden y muchos de ellos todavía siguen plagando el país. Este estudio enfoca varias áreas interrelacionadas que contribuyeron a su fracaso. La primera consiste en las condiciones de crisis que Fujimori heredó, las cuales le permitieron imponer fácilmente un estilo extremadamente personalista, populista y autocrático que prometió "limpiar la casa" después de años de caos. La segunda se refiere a que conforme Fujimori se volvía progresivamente más dictatorial, confió más y más en los militares y en los servicios de inteligencia para "crearse" una legitimidad. Como sus tácticas se volvieron más ásperas y patentes (culminando en la difusión de los hoy famosos videos que muestran a Montesinos sobornando

abiertamente a un candidato de la oposición), las presiones internas y externas aumentaron. En tercer lugar, a lo largo de la década la asociación Fujimori-Montesinos se desarrolló una relación compleja e interdependiente con el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Clinton apoyó a Fujimori en la década de los años 90, las acusaciones de fraude y corrupción —antes y durante las elecciones del 2000— instaron a los Estados Unidos a aprobar varias resoluciones exigiendo mejoras en el proceso electoral peruano, junto con una creciente atención a los derechos humanos. Se asestó el golpe final a las relaciones EEUU-Perú, cuando la conexión entre Montesinos (y Fujimori, por asociación), los narcotraficantes y la venta de armas al grupo rebelde colombiano (FARC) fueron abiertamente reveladas y los Estados Unidos no pudieron aceptar por más tiempo las descaradas violaciones de su anterior aliado.

Esta investigación tiene implicaciones mayores para el estudio de la política latinoamericana a inicios del siglo XXI. Han pasado dos décadas desde que buena parte de la región hizo la transición de la norma militar a la civil, cuando esta "tercera ola" de democratización fue recibida con mucha fanfarria. Los analistas políticos pasaron de una discusión de transición democrática a una de consolidación, ya que las elecciones se desarrollaron con éxito y el poder fue transferido pacíficamente entre los partidos políticos en cada país. Pero este escenario positivo se ha encontrado crecientemente amenazado, abarcando desde el fracaso de los sistemas de partidos en Perú y Venezuela hasta la elección de ex líderes militares en Bolivia y Venezuela, escándalos de corrupción en Brasil y Argentina, golpes de Estado e intentos de golpe en Ecuador y Paraguay, y la furiosa violencia en Colombia. Las relaciones complejas y multilaterales de la región con la comunidad internacional complican esta situación, ya que los objetivos de la democracia, la protección de los derechos humanos y la subordinación militar, a menudo chocan con la necesidad de acabar con la violencia y erradicar la producción de narcóticos. En la misma tendencia,

el paradigma dominante de la economía de libre mercado ha estado frecuentemente de espaldas a la necesidad, cada vez mayor, de crear fuentes de trabajo y gastos en obras sociales para aliviar la pobreza. En suma, muchos de los problemas que enfrenta el Perú se presentan en otros países de la región, y su examen busca echar luces sobre soluciones comunes así como sobre obstáculos compartidos.

LA LÓGICA DE LA LEGITIMIDAD

La legitimidad política es un concepto problemático y caprichoso. Su definición varía no sólo entre regímenes sino también dentro de ellos: aquello que constituye autoridad legítima para un líder en un lugar y momento dado, puede no ser adecuado bajo otras condiciones. No hay una definición única de liderazgo legítimo; su existencia reside en la siempre cambiante fe de los seguidores o electores en su líder.³ Juan Linz (1978: 17) describe la naturaleza condicional de esta relación al afirmar que un gobierno obtiene legitimidad ante sus ciudadanos, pero ella es "otorgada y retractada por cada miembro de la sociedad cada día." Él ofrece la siguiente definición de legitimidad:

Un gobierno legítimo es aquel que se considera el menos malo de las formas de gobierno. Últimamente, la legitimidad democrática está basada en la creencia de que para ese país y en esa particular coyuntura histórica, ningún otro tipo de régimen podría asegurar una consecución más exitosa de las metas colectivas. (Linz 1978: 18)

La globalización complica esta definición porque fuerza a los líderes a legitimar su autoridad no sólo ante los ojos de los ciudadanos, sino también ante la opinión de la comunidad internacional. Y las "metas colectivas" entre estos distintos sectores pueden contradecirse unas con otras, ¿a quién debe responder el líder?

3 Esta discusión está basada en la descripción de Max Weber (1947) sobre autoridad carismática y legitimidad.

Diversos grupos confrontan a los líderes con demandas diferentes. Al comienzo del régimen de Fujimori los votantes peruanos tenían dos preocupaciones primordiales: la derrota del terrorismo y el alivio del caos económico de la década de los años 80.⁴ Las rudas tácticas del Presidente para aliviar estas crisis fueron, por momentos, en sentido contrario a lo que los regímenes internacionales prevalecientes demandaban: democracia, transparencia política y respeto por los derechos humanos. Al mismo tiempo, la comunidad financiera internacional quería que el Perú adoptara medidas de libre mercado, que permitirían a la nación recuperar su solvencia económica y su participación en la economía global, pero los electores nacionales habían rechazado al candidato presidencial que abogaba por tales reformas. Los intereses de estos grupos podían llegar a ser excluyentes, por lo que examinaremos la manera en la que Fujimori fue, a menudo, forzado a escoger entre ellos, eventualmente sin satisfacer a ninguno y por último creando las condiciones para su propia autodestrucción.

Antes de explorar las causas de la caída de Fujimori es importante subrayar las razones fundamentales por las que tuvo éxito en mantener un alto grado de popularidad a lo largo de su régimen. Expuesto de manera simple, él dio a los peruanos lo que ellos querían y desesperadamente buscaron a lo largo de la década de los años 80: la derrota de Sendero Luminoso y la captura de su líder, Abimael Guzmán; el fin de la hiperinflación y de la inestabilidad económica; y una presencia del Estado en regiones tradicionalmente descuidadas y abandonadas del país. Lo último tomó la forma de miles de proyectos de obras públicas y programas sociales; construcción de escuelas, hospitales, caminos y viviendas; e implementación de servicios de salud y asistencia alimentaria (Graham y Kane 1998). De hecho, en un sondeo de opinión pública de febrero del 2000, 58% de los

4 Las crisis económicas y militares del Perú de la década de los años 80 han sido ampliamente analizadas. Ver, por ejemplo, Cameron y Mauzeri (1997), Crabtree y Thomas, eds. (1998), Degregori y Grompone (1991), Wise (2001) y Marcus-Delgado (1999).

entrevistados dio crédito al Estado por llevar proyectos de obras públicas a sus zonas de residencia, porcentaje que se elevó al 75% en las áreas rurales. En la misma tendencia, 73% de los residentes rurales declararon que recientemente habían recibido algún tipo de asistencia alimentaria del gobierno. Un número significativo de ellos atribuyó esta ayuda directamente a los esfuerzos del presidente Fujimori (Apoyo Opinión y Mercado S.A.). En un país donde casi la mitad de la población depende de alguna forma de asistencia (ya sea del gobierno o de una ONG nacional o internacional), la atención de Fujimori a las necesidades básicas de la población no debe ser subestimada; tampoco deben pasarse por alto sus esfuerzos por llevar la paz al Perú, tanto internamente como en el conflicto con Ecuador.⁵

Si Fujimori disfrutaba del apoyo popular, especialmente entre los peruanos pobres, ¿por qué optó por un camino corrupto y autoritario, en vez de permanecer en el poder por medios democráticos? La respuesta aparente arroja luces sobre elementos importantes que permitieron al Presidente gobernar autocráticamente: la debilidad del Estado, la falta de instituciones democráticas y de una oposición organizada. Estos factores crearon las condiciones que dieron lugar a un líder con el estilo de gobierno de Fujimori, capaz de gobernar la nación relativamente sin restricciones.

Mucho antes de que el Presidente disolviera el Congreso en 1992, la existencia de la democracia estaba lejos de ser una realidad en el Perú. Para el momento en que el autogolpe tuvo lugar, las condiciones políticas, económicas y sociales de la na-

5 El costo de los logros de Fujimori, si bien válidos, fue muy alto para la población. Los proyectos de obras públicas y programas sociales fueron inadecuados; además, se distribuyeron estratégicamente de acuerdo a conveniencias políticas y no basándose en las necesidades de la población (ver Graham y Kane 1998). De manera similar, la lucha contra Sendero Luminoso creó muchos problemas, incluyendo actividades paramilitares desenfrenadas; acciones abusivas y violentas contra los "sospechosos", sin respetar sus derechos; y un crecimiento y fortalecimiento de la presencia militar en la política.

ción se habían deteriorado tanto, que algunos analistas llegaron a preguntarse por qué no había ocurrido antes (ver Wise, 1994). La economía había sido devastada desde comienzos de la década de los años 80 y el gobierno había hecho poco para aliviar los efectos de su severo programa de reforma. Más de la mitad de la población estaba viviendo en las "zonas de emergencia", declaradas así por el Estado, donde Sendero Luminoso y los militares estaban enfrascados en una enérgica guerra, cometiéndose incontables atrocidades contra los derechos humanos desde ambos lados. Los partidos políticos habían colapsado y el Poder Judicial estaba amenazado por el terrorismo y plagado de corrupción (Stokes 1995). Los peruanos estaban desesperados por un liderazgo fuerte y los políticos tradicionales habían sido incapaces de resolver sus crisis. Fujimori, respaldado por los militares, les ofreció la promesa populista de salvación.

Sin embargo, un liderazgo fuerte e instituciones fortalecidas no eran todo lo que faltaba para la construcción de un gobierno democrático en el Perú. El país había sufrido años de dictaduras militares, seguidos por crisis económica y violencia; todo esto añadido a una historia de liderazgo populista que había descuidado y alienado amplios sectores de la población. Linz y Stepan afirman: "Incluso antes del autogolpe del presidente Fujimori, el Estado peruano se había encogido tanto que la ciudadanía y la democracia habían perdido mucho de su significado". La ausencia de "Estado" (*stateness*) fue recogida por Julio Cotler, quien identificó los problemas del Perú no sólo como una reconstrucción del gobierno o del sistema de partidos políticos, sino fundamentalmente como la construcción de un Estado funcional.⁶ Es lógico que un líder fuerte y con autoconfianza, que prometió poco pero no llevaba nada de la herencia impopular de los políticos tradicionales, llenara fácilmente este vacío.

6 Julio Cotler, exposición en Princeton University, 20 de octubre, 2000.

El estilo personal de gobierno del Presidente complementó pulcramente las condiciones caóticas e instituciones débiles que lo rodeaban. Antes que intentar fortalecer el gobierno, usó sistemáticamente su presidencia para exacerbar la percepción negativa del público sobre el Estado. Se rodeó de un círculo muy cercano de asesores, limitándolos ya sea a neófitos políticos, miembros de su propia familia o pares de la comunidad peruano-japonesa (Crabtree 1998). Desde el comienzo, sus políticas también reflejaron cercanamente a aquéllas abogadas por las Fuerzas Armadas, quienes fueron su más fuerte aliado político durante todo su gobierno." Durante los dos primeros años, Fujimori no tuvo una estructura de partido político como tampoco una mayoría en ninguna de las cámaras. Sus decisiones fueron hechas con poca o ninguna consulta a otros políticos, de hecho él atacó a los miembros del Congreso por la falta de progreso en su programa económico y por crear obstáculos a su campaña militar contra Sendero.

Burlando los canales de comunicación entre el Estado y la población, el Presidente buscó el contacto directo con el público para mantener su apoyo. Su retórica fue marcadamente antipolítica, salpicada con ataques a los políticos tradicionales y a la "partidocracia" —un tipo de democracia en la que los partidos políticos de elite dominan el sistema y excluyen la participación de la mayoría. Fujimori dependió fuertemente de las encuestas de opinión pública, las que usaba para racionalizar sus acciones antidemocráticas ante los ojos tanto de la comunidad nacional como de la internacional. Los ataques a sus blancos fueron efectivos, pues las encuestas mostraron una caída precipitada, en la percepción pública, de los oponentes del Presidente: el Congreso, las cortes y los partidos políticos tradicionales. En marzo de 1992, un mes previo al autogolpe,

7 Cameron (1997) resume el "Plan Verde" militar de 1989, un documento que refleja el temprano apoyo de la Institución para la instalación de un gobierno rudo con economía de mercado —lo que se dio rápidamente en la presidencia de Fujimori.

Fujimori había alcanzado un impresionante índice de aprobación de 64.3% mientras el poder judicial, los partidos y el Congreso recibieron índices de 14%, 12% y 17% respectivamente (Conaghan 1995). En esta coyuntura, la población otorgó legitimidad política a su líder, basándose en la eficacia de su política: optar por una "mano dura" en un contexto donde la democracia nunca había sido óptima. Para muchos la democracia era, en ese momento, menos importante que la satisfacción de sus necesidades inmediatas.

LA FABRICACIÓN DE LA LEGITIMIDAD INTERNA: LOS RECURSOS DEL ESTADO, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL SIN

La imposición autocrática del autogolpe de Fujimori dispuso el escenario estructural y estilístico para el resto de su gobierno. La infraestructura completa del gobierno fue replanteada, desde la legislatura hasta los gobiernos locales. El Congreso fue transformado de dos cámaras a una, con representantes escogidos de un distrito único en vez de uno múltiple. El Poder Judicial fue purgado por el Presidente, quien despidió a 134 de sus miembros, pocos días antes del golpe, y a muchos más en las semanas que siguieron. También destituyó a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, al Fiscal de la Nación, a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, a los de la Academia Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A través de un decreto de emergencia (D.L. N.º 25441), el Presidente nombró nuevos miembros provisionales de la Corte Suprema; ellos continuaron destituyendo jueces adicionales en toda la jerarquía institucional (De Belaúnde 1998, *Resumen Semanal*, Balbi 1992). Por su parte, los gobiernos regionales, que habían sido establecidos durante el gobierno de García, fueron disueltos y su jurisdicción pasó al Poder Ejecutivo bajo el nuevo Ministerio de la Presidencia.

Estos movimientos, arreglados por el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" del postgolpe, establecieron el marco institucional bajo el cual Fujimori gobernaría hasta

el 2000. También dispusieron el estilo del escenario, dado que el autogolpe fue planeado en secreto y llevado a cabo por sorpresa y por la fuerza, *modus operandi* que caracterizaría muchas de las acciones futuras del Presidente.⁸

El auto golpe resultó ser bastante popular en el frente interno, ganando índices de aprobación en un rango de 70% a 80% (Conaghan 1995, Degregori 2000). Sin embargo, la comunidad internacional condenó sonoramente el movimiento, demandando la inmediata restauración de la democracia. Para calmar a sus críticos, Fujimori convocó a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente Democrático (CCD) de ochenta miembros, que sirvió como el legislativo peruano hasta 1995. La coalición del presidente, CAMBIO 90/Nueva Mayoría, ganó cuarenta y cuatro puestos en el Congreso, al mismo tiempo que los tres principales partidos políticos boicotearon las elecciones en protesta por la autoritaria toma de poder del Presidente.

El CCD funcionó como una legislatura unicameral que sirvió para dos propósitos: proporcionar al Presidente las credenciales democráticas que buscaba para imponer sus políticas económicas y militares, y redactar una nueva Constitución. Uno de los primeros actos del Congreso fue ratificar la legislación aprobada entre abril y diciembre de 1992. Estos decretos leyes especiales fueron en total 748, número que superó ampliamente el de los aprobados por los predecesores del Presidente. Muchas de estas leyes reforzaban la impunidad de las Fuerzas Armadas, las cuales estuvieron implicadas en numerosas violaciones de los derechos humanos en su lucha contra Sendero Luminoso (Youngers 1994). El CCD proveyó al Presidente la apariencia de legalidad que necesitaba para facilitar su agenda

8 Quizá el más notorio ejemplo del cauteloso estilo de operación de Fujimori fue el dramático rescate de los rehenes que estaban en poder del MRTA, en la residencia del embajador japonés en 1997–1998. De acuerdo con Rospigliosi (2000), la misión fue conocida solamente por Fujimori, Montesinos, tres coroneles y un oficial del SIN; ni siquiera el gobierno japonés tuvo conocimiento del plan.

autocrática. También se encargó de la reescritura de la Constitución, con el propósito principal de permitir al Presidente sucederse a sí mismo en el gobierno.

Después del autogolpe, el Presidente reestructuró el ejército racionalizando sus operaciones y poniéndolo directamente bajo su control. Se creó un Consejo de Defensa Nacional, consistente en dos instituciones principales: El Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) centralizado y el Secretariado de Defensa Nacional. Fujimori ascendió a los altos mandos militares a rangos mayores dentro del gobierno e integró la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el SIN, convirtiendo al aparato de defensa en su aliado político más poderoso.

El autogolpe puso las bases para el intento de reelección de Fujimori en 1995. Para controlar la disposición de los recursos financieros de la nación, Fujimori los concentró en el Ministerio de la Presidencia, que se convirtió en una fuente de fondos para ser usada por el Presidente sin obligación de dar cuenta alguna. El Ministerio de la Presidencia asumió el control de la mayoría de los proyectos de obras públicas y servicios sociales (Sagasti y Guerra-García 1997). Empezó a dirigir programas hacia las áreas donde se necesitaba apoyo electoral, elevando marcadamente los gastos; esto fue después de casi perder en el referéndum de 1993, sobre la nueva constitución. Desde 1993 hasta su reelección, Fujimori incrementó el gasto en US\$ 400 millones, y el número de peruanos beneficiados de los programas sociales se elevó a aproximadamente 2 949 000 familias; es decir, 61.4% de hogares (INEI 1996). Dirigiendo estratégicamente las dádivas del gobierno a los votantes pobres y rurales, el Presidente se aseguró el apoyo de los mismos en las elecciones venideras, las que ganó fácilmente.⁹

En agosto de 1996, Fujimori había decidido postular a un tercer período. Para legitimar su esfuerzo, la legislatura

9 Acerca de las discusiones sobre la manera en que "neopopulistas" como Fujimori dirigieron los programas de asistencia a los sectores pobres para comprar sus votos, ver Weyland (1998 y 2(00) Y Roberts (1995).

—en donde sus partidarios tenían la mayoría— aprobó la "Ley de Interpretación Auténtica". Ésta argumentaba que, como la Constitución de 1993 había tenido efecto después de la elección inicial del Presidente, su período 1995-2000 era técnicamente el primero bajo la nueva carta. Por lo tanto, ya que la Constitución permitía la reelección, Fujimori era legalmente elegible para sucederse a sí mismo. La decisión se encontró con una gran oposición interna, a la que el Ejecutivo respondió usando los medios a su disposición, a saber, el resto del aparato del Estado. Tres jueces que se opusieron a la "interpretación auténtica" fueron removidos sumariamente de sus puestos. Por otro lado, los oponentes políticos de Fujimori condujeron una campaña masiva, buscando forzar un referéndum sobre la reelección. Ellos recolectaron el millón y medio de firmas requeridas y las presentaron al Congreso. La legislatura inmediatamente declaró una ley que establecía que, además de las firmas, 48 miembros del Congreso tenían que votar a favor del referéndum para que éste se llevara a cabo. El referéndum nunca se realizó y Fujimori procedió con sus planes de postular, una vez más, a la presidencia.

Preparándose para las elecciones del 2000, el Presidente intensificó sus vínculos clientelistas con los electores nacionales, usando libremente los fondos, las propiedades y el personal del Estado para sus fines políticos. De los 174 abusos de la campaña del gobierno reportados al grupo de observación electoral Transparencia (2000), 36% se referían al mal uso de bienes públicos, 26% al uso politizado de recursos del Estado para hacer campaña y 36% a los llamados actos para hostilizar. Unos meses antes de la elección, el periodista Isaías Rojas declaró "El aparato del Estado ha sido convertido en un aparato partidario. En efecto, no hay ciudad ni región en la que todas las instituciones públicas no estén trabajando hacia esta meta de una manera disciplinada, con dedicación exclusiva" (Rojas 2000: 12). Bajo el mando centralizado del Ministerio de la Presidencia, líderes subnacionales manejaron la campaña en la prensa local, organizando protestas contra candidatos de oposición y

movilizando a los residentes para apoyar a los fujimoristas, los cuales se presentaron como integrantes de la agrupación "Perú 2000".¹⁰ Trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas, los militantes locales literalmente cubrieron el campo con propaganda a favor de Fujimori, a la vez que borrarón, eliminaron o rompieron la de los adversarios del Presidente.

Los receptores de los programas de asistencia del gobierno —como los comedores populares patrocinados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)— informaron que habían sido presionados por miembros de "Perú 2000" para que votaran por el Presidente, asistieran a marchas de apoyo y usaran el logo del grupo durante sus actividades diarias. Los vehículos del gobierno se utilizaron para transportar partidarios a reuniones proFujimori, los trabajadores estatales emplearon sus días de trabajo para hacer campaña por el Presidente y los trabajadores de la educación fueron forzados a registrarse como miembros de "Perú 2000" para poder continuar en sus puestos de trabajo (Transparencia 2000). En suma, la cruzada por la reelección del 2000 fue un esfuerzo nacional, con un presupuesto aparentemente ilimitado, llevada a cabo por el gobierno en cada esquina del país.

Mientras los trabajadores de los gobiernos locales ocupaban su tiempo haciendo campaña por la reelección presidencial, Montesinos y el SIN estaban muy ocupados manejando las operaciones secretas del gobierno. Sus esfuerzos en las elecciones del 2000, representaron la culminación de diez años de experiencia, incluyendo actividades como la manipulación de los medios de comunicación; la intimidación y persecución de candidatos de oposición; y la intervención en el trabajo de las

10 Uno de los escándalos más notorios que rodearon las elecciones del 2000 fue la inscripción del movimiento "Perú 2000". Basado en el testimonio de dos testigos y verificado a través de investigaciones posteriores, el respetado diario *El Comercio* reveló que la agrupación política había falsificado más de un millón de firmas para cumplir con los requisitos de la inscripción para las elecciones (Ver *El Comercio*, *Ideele* 126, marzo 2000 y Cotler 2000:54).

autoridades electorales. La siguiente sección analiza la manera en que las prácticas corruptas del gobierno sirvieron para legitimar el gobierno de Fujimori y preparar el terreno para su tercer período en el poder.

El SIN funcionaba en varios niveles, ganando notoriedad a través de diversas actividades bien documentadas: complicidad con los abusos militares de los derechos humanos de los civiles, intervenciones telefónicas, soborno e intimidación a políticos de oposición y otras figuras públicas. Sería difícil exagerar el alcance de la influencia de Montesinos en el gobierno de Fujimori —a pesar de que la historia completa de la relación todavía no ha sido revelada— o el poder que el maestro de los espías ejerció sobre el Presidente.¹¹ Mientras la complicidad de Montesinos en la represión del terrorismo y en lo referente a las violaciones de los derechos humanos ha sido documentada en todas partes, el presente estudio enfoca específicamente aquellas áreas que tuvieron un impacto directo en la supervivencia política de Fujimori: intimidación y persecución de oponentes políticos, intervención en los medios de comunicación y participación en la guerra contra las drogas.¹²

La complicidad del aparato de inteligencia en el trabajo político de Fujimori iba desde escuchar las conversaciones telefónicas hasta conducir extensas campañas de difamación contra los candidatos rivales. En agosto de 1997, el anterior candidato presidencial, Javier Pérez de Cuéllar, denunció al gobierno por la ilegal intervención telefónica y grabación de incontables

11 Por años han circulado historias en el Perú, sobre por qué Montesinos fue capaz de ejercer tal control sobre Fujimori a comienzos de la década de los años 90. Se sabe que al inicio de su administración, Montesinos fue su abogado en un asunto relacionado con evasión de impuestos en un caso inmobiliario. Más tarde, aparece en el gobierno como si los dos fuesen "socios en el crimen", siendo cada uno capaz de incriminar al otro en incontables cargos y conduciendo juntos tratos turbios que los beneficiaban financiera y políticamente.

12 El involucramiento del SIN en las violaciones de derechos humanos está bien documentado en Youngers (2000). Para los antecedentes de Montesinos ver Rospigliosi (2000), Zimmerman Zavala (1997) y *Caretas* (2000).

conversaciones durante la campaña de 1995. Sus alegatos fueron verificados más tarde por un antiguo miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que testificó que el aparato de inteligencia había escuchado miles de llamadas telefónicas (Youngers 2000 y *Caretas* 1997 y 1998). El clamor público sobre el escándalo de las intervenciones telefónicas obligó al Congreso peruano a iniciar una investigación. No fue una sorpresa, dado el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, que el informe final absolviera al SIN y al aparato de seguridad en la totalidad de sus cargos. Se llegó más lejos, aún, al acusar de haber fabricado la evidencia, a los periodistas que habían informado sobre el caso.

La persecución e intimidación de oponentes políticos continuó de manera desenfadada durante toda la segunda presidencia de Fujimori.¹³ El principal campo de batalla fueron los medios de comunicación; desde ahí el gobierno empleó, con éxito, una combinación de maniobras judiciales, financieras y otras, para formar la cobertura periodística del proceso político.¹⁴ La intervención de los medios de comunicación se manifestó en tres amplias áreas: persecución y acciones legales contra periodistas adversarios y propietarios de medios; soborno y corrupción a funcionarios de los medios de comunicación; y transmisión directa de propaganda a favor del gobierno, especialmente en los tabloides ("prensa chicha").

Dada la relación Estado–sociedad desarrollada por el gobierno de Fujimori —por la cual instituciones intermediarias

13 La intervención y persecución de los medios de comunicación por parte del gobierno de Fujimori comenzó tan pronto como el Presidente asumió el cargo. *Caretas* remonta sus problemas con el aparato de inteligencia a junio de 1991, cuando Montesinos demandó al director de la revista, Enrique Zileri, por difamación de carácter. Parte de su acusación consistió en la referencia que el periodista hizo sobre él llamándolo "Rasputín". Eventualmente, Zileri fue encontrado culpable por la Corte Suprema; frente a este hecho, *Caretas* ha presentado una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

14 Mucha información sobre las relaciones Estado-prensa proviene de Conaghan (1998) y Transparencia (2000).

como partidos políticos, grupos de interés, sindicatos, líderes locales autónomos y otros funcionarios del gobierno fueron efectivamente debilitados—, la prensa se convirtió en un conducto crucial de información. Los medios que simpatizaban con el régimen (o eran políticamente neutrales) formaron la opinión pública a través de su cobertura y de las omisiones sobre ciertas actividades del gobierno. La información hostil al gobierno o favorable a sus oponentes, generalmente no era reportada en los principales medios de comunicación.

Los medios de comunicación que se oponían al régimen se convirtieron, muy pronto, en su blanco. De acuerdo con Conaghan (1998), después que la prensa publicó los reportes implicando a los militares y a los servicios de inteligencia en los abusos de los derechos humanos, a principios de la década de los años 90, los periodistas antigobiernistas se llegaron a convencer de que sus actividades eran vigiladas por el SIN. Algunos recibieron amenazas de muerte anónimas y se creía que los teléfonos de los reporteros estaban intervenidos. Estos medios se convirtieron en blancos del desafecto del Estado, sufriendo económicamente porque los auspiciadores se mostraban reacios a trabajar con ellos. Hacia el comienzo del segundo período, la ira del gobierno se dirigió hacia la televisión, ejemplificada en el infame caso de Baruch Ivcher, antiguo propietario de *Frecuencia Latina* (Canal 2).

Ivcher, nacido en Israel y nacionalizado peruano, había defendido al régimen en sus primeros años, elogio que había incluido su apoyo público por el autogolpe. El punto crítico en las relaciones de Ivcher con el SIN ocurrió en 1996, cuando sacó al aire el testimonio del traficante de drogas Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como "Vaticano". Después de su arresto, "Vaticano" testificó que había estado pagando US\$ 50 000 mensuales a Montesinos y proporcionando información para las operaciones antidrogas, a cambio del permiso para operar en el área de Campanilla. Más adelante, afirmó que su detención se había producido después de que Montesinos había incrementado la suma a US\$ 100 000, la cual se rehusó a pagar.

Su testimonio fue apoyado por reportajes del Canal 4, así como por grabaciones de comunicaciones entre los socios de Chávez y oficiales del Ejército. El Ejército negó con vehemencia estas acusaciones y en apariciones posteriores, durante su juicio, Chávez parecía desorientado, lo que dio lugar a que muchos especularan sobre la posibilidad de que hubiese sido torturado para impedirle hacer acusaciones creíbles contra el jefe de espías. La cobertura del testimonio de "Vaticano" fue seguida en 1997, por denuncias posteriores de abusos de los servicios de inteligencia y militares. En abril, el Canal 2 difundió una entrevista con una oficial de inteligencia, Leonor La Rosa, quien denunciaba haber sido torturada por agentes del SIN. Más adelante, el mismo programa, *Contrapunto*, difundió una revelación pública de la declaración de impuestos de Montesinos —lo que enfureció a los líderes del régimen.¹⁵

Las represalias contra Ivcher llegaron en diferentes formas que ilustran la coordinación de las fuerzas del Estado bajo la alianza Fujimori-Montesinos. Primero, la agencia recaudadora de impuestos (SUNAT) comenzó a auditar los registros del Canal 2, táctica que había sido ampliamente empleada para hostigar a otros enemigos del Presidente. El gobierno, entonces, dispuso que el Ministerio del Interior determinara que la ciudadanía por naturalización podía ser retirada a los ciudadanos que hubieran cometido "actos que afectaran la seguridad nacional", disposición que apuntaba directamente a Ivcher. La campaña contra Ivcher continuó con una resolución en su contra, aprobada por la legislatura dominada por los fujimoristas. El Canal 2 respondió con evidencias de la extendida intervención telefónica de políticos de oposición y periodistas. El gobierno no pudo tolerar esto e Ivcher fue despojado sumariamente de su nacionalidad peruana; por lo tanto, perdía la propiedad de la estación de televisión.

15 Una amplia documentación del caso Ivcher puede encontrarse en www.ivcher.com.

Otros periodistas sufrieron persecución, amenazas, secuestro y asaltos. Muchos de ellos —incluyendo a Baruch Ivcher— fueron forzados a huir del Perú. Y, como Youngers (2000) reporta, las restricciones del régimen a la libertad de prensa fueron ampliamente documentadas tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, a pesar de la publicidad negativa que recibió en toda la segunda mitad de la década de los años 90, Fujimori incrementó grandemente su manipulación de los medios en los meses previos a su intento presidencial del 2000. Durante 1999, la SUNAT continuó con su práctica de auditar las declaraciones de impuestos de los periodistas, demandando el pago de impuestos atrasados al Estado, situación en la cual la mayoría de estaciones de televisión se encontraba. Por su parte, el gobierno elevó sus gastos en publicidad, incrementando la visibilidad para el oficialismo y limitando severamente la exposición para los candidatos de oposición. Con excepción de unos pocos canales de televisión por cable (que son vistos por un segmento muy pequeño de la población, debido al costo de este servicio), el Presidente recibió más cobertura televisiva que sus oponentes. Transparencia, por ejemplo, documentó el siguiente análisis de la cobertura televisiva de octubre de 1999, para Fujimori y sus tres rivales más cercanos: Fujimori 78%, Andrade 11 %, Toledo 6% y Castañeda 5%. Más tarde, en marzo del 2000, Transparencia (2000) informó sobre la cobertura de los candidatos en los noticieros nocturnos: Fujimori 68%, Toledo 9% y los otros seis candidatos en conjunto 23%.

Como parte de su búsqueda por la reelección, Fujimori borró la línea divisoria entre propaganda de campaña e información de servicio público. El monto total gastado por todos los candidatos presidenciales para anunciar en la televisión, la radio y los medios impresos fue US\$ 2 031 67.79, de los cuales el gobernante gastó aproximadamente US\$ 1 685 234.36 (83%). Esta cantidad debería añadirse a los fondos gastados por el Estado que beneficiaron la causa del Presidente, ya que entre 1997 y 1999 el gobierno incrementó sus gastos de prensa en

109%, de US\$ 29 970 328.64 a US\$ 62 639 571.15. De este modo, superó a los más importantes anunciantes tradicionales, cuyos gastos declinaron durante el mismo periodo.¹⁶

Mientras el aparato de campaña del Estado cubría los medios de comunicación con el mensaje a favor de Fujimori, por primera vez en la historia peruana las principales estaciones de televisión no aceptaban avisos pagados de los candidatos de oposición. Después de una gran presión pública, algunos canales se ablandaron; sin embargo, cobraron tarifas exorbitantes a los candidatos de oposición. Al acercarse el día de las elecciones, se otorgó a los candidatos un tiempo limitado de espacio gratis en la televisión, pero para entonces la campaña del gobierno había saturado el aire. El tiempo asignado a la oposición empalideció en comparación con la cobertura del gobernante y, finalmente, tuvo poco efecto en el resultado de la elección.

Sin embargo, la influencia más directa del SIN se manifestaba en los tabloides "amarillos", la prensa chicha. Sabiendo que la base más fuerte de apoyo al régimen descansaba en los sectores más pobres de la sociedad, el aparato de inteligencia empezó a alimentar de propaganda pro gobiernista a estas publicaciones baratas, leídas principalmente por los peruanos de bajos ingresos.¹⁷ Los tabloides adoptaron una estrategia de tres puntas: atacando a los periodistas antifujimoristas y desacreditando su cobertura política; levantando calumnias contra los candidatos rivales con acusaciones sobre su vida personal; y promoviendo las actividades y política del gobierno.¹⁸ Debido a la

16 De 1997 a 1999, el gasto de las compañías de cerveza bajó 40.59%, bancos -52.18%, bebidas gaseosas -36.43%, detergentes -38.18% y shampoo -43.60% (Transparencia 2000: 100).

17 Sobre la "prensa chicha" ver Degregori (2000), Centro para el Estudio de la Democracia (2000), Youngers (2000), Conaghan (1998) y Transparencia (2000).

18 Degregori (2000) analiza a fondo el uso político del "periodismo amarillo" por parte del régimen. Además de los ataques a los políticos y periodistas descritos aquí, el autor documenta la revitalización de los medios de comunicación, basada en el temor del público al terrorismo pasado (Sendero

similitud con la que los medios informaban se cree que, además de las grandes sumas de dinero que estaban recibiendo, publicaban "artículos" escritos y transmitidos directamente a ellos por los agentes de Fujimori.

El SIN fabricaba la legitimidad para el régimen cubriendo muchas de sus acciones corruptas con una delgada capa de legalidad. Antes de cerrar arbitrariamente negocios y medios de comunicación, por ejemplo, usó a la recaudadora de impuestos para hostilizarlos o cerrarlos "legalmente". De manera similar, en lugar de asesinar o desterrar a figuras de la oposición y de los medios de comunicación —como anteriores dictadores habían hecho— el gobierno cambió leyes relacionadas a la ciudadanía (como en el caso de Ivcher) o hacía que el Poder Judicial dictara sentencias que los censuraran de manera institucional, "más limpia". El escritor y político Mario Vargas Llosa describió sucintamente la naturaleza de la corrupción en el régimen de Fujimori:

Todas las dictaduras fomentan la corrupción y en el Perú ése ha sido también el caso, desde luego. Pero ésta es la primera que lo hizo de una manera científica, institucional, organizando el Poder Judicial y el sistema de recaudación de impuestos con ese designio, como un poderosísimo instrumento de coerción, que silenciaba las críticas, mantenía al ciudadano sobre ascuas y lo obligaba a servir al régimen, y al mismo tiempo que esquilaba a diestra y siniestra, disfrazaba los robos y despojos con un barniz de legalidad. (Vargas Llosa 2000: 101)

El "barniz de legalidad" de Fujimori le sirvió diez años. Como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la SUNAT, las autoridades electorales y los aparatos de inteligencia y militar encubrían sus prácticas corruptas, él continuó con una tasa muy alta

Luminoso y MRTA) y presente (las FARC colombianas), para reforzar el apoyo a la presidencia de Fujimori. Degregori también hace una lista de los tabloides que recibieron apoyo económico del Estado —y de los que fueron directamente propiedad del mismo— así como de los dueños de medios de comunicación que participaron en el movimiento político de Fujimori.

de aprobación en los sondeos de opinión pública y pudo ganar las elecciones. Fujimori usó, efectivamente, recursos del Estado para sus fines políticos, premiando estratégicamente a sus seguidores y partidarios potenciales a la vez que castigaba a sus oponentes. Su estilo autocrático, de exclusión, condujo a la mayoría de peruanos hacia un camino familiar, populista, en el que colocaban su confianza política en un líder fuerte, decisivo, que prometía restaurar la paz y la prosperidad.

Antes de pasar a los aspectos externos de la legitimidad de Fujimori, es importante subrayar dos factores claves que contribuyeron a la caída de su presidencia: la fortaleza de la oposición y la erosión de su base de apoyo. Primero, hay que reconocer los esfuerzos de aquellos que alzaron la voz oponiéndose al régimen, a menudo a costa de un gran riesgo. Por razones de espacio, este artículo se centra en las acciones del gobierno para mantener su legitimidad y no pretende documentar los intensos esfuerzos para desafiarlas. Estos últimos fueron actos heroicos de miembros del Congreso, organizaciones no gubernamentales, jueces, burócratas, estudiantes, periodistas y ciudadanos de muchos sectores de la sociedad civil. Sin pretender en absoluto disminuir su importancia, este estudio documenta la fortaleza del gobierno autoritario y su habilidad para mantener el apoyo de un notable porcentaje de la población, silenciando o ignorando a sus críticos, hasta su colapso después de las elecciones del 2000.

El segundo factor tiene que ver con las encuestas de opinión pública. Como hemos señalado anteriormente, la tasa de aprobación de Fujimori se mantenía alrededor del 50%, aún después de las elecciones del 2000. Sin embargo, la vieja base de apoyo ya se había desintegrado para esta fecha. Muchos continuaban votando por Fujimori porque habían aceptado el hecho de que su reelección era inevitable o porque no percibían que la oposición era una alternativa viable. Esta base de apoyo no era de los fervientes seguidores de las dos primeras presidencias, sino de un grupo de votantes fragmentado, desilusionado y resignado.

Desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos han tenido cuatro principios básicos en su política hacia Latinoamérica: primero, la introducción de la economía de libre mercado; segundo, la eliminación de cualquier vestigio de actividad terrorista de izquierda; tercero, la guerra contra las drogas; y cuarto, la restauración de gobiernos democráticos. A lo largo de la década de los años 90, el gobierno de Fujimori intentó cumplir con las esperanzas de los Estados Unidos en cada una de estas áreas, respondiendo a sus demandas y a las de la comunidad internacional mucho más rápida e interesadamente que a las de sus electores nacionales (Cotler y Grompone 2000). La siguiente sección examina las maneras usadas por el régimen para apaciguar ostensiblemente a aquellos que lo respaldaban en el exterior y simultáneamente sabotear sus esfuerzos, un doble juego que al final lo llevó a su destrucción.

En cuanto a la política económica, Fujimori se ajustó estrictamente a los parámetros bosquejados en el "Consenso de Washington". Durante su campaña inicial había prometido a los votantes que si era elegido, y a diferencia de su rival neoliberal Mario Vargas Llosa, él no impondría un programa radical de reforma de libre mercado. Su planteamiento, vagamente expuesto, sería uno de ajuste gradual y una desaceleración del crecimiento económico a una tasa manejable relativa a la inflación y desempleo (Wise 2001: 3). Pero a fines de julio, después de visitar Washington y Japón, el Presidente dio un repentino giro. Su ahora famoso "fujishock" demostró ser uno de los esfuerzos de reforma de orientación al mercado, más duros de Latinoamérica (Graham 1994 y Sheahan 1994). En los años que siguieron, el régimen se dedicó a re establecer las frágiles relaciones entre Perú y la comunidad financiera internacional, deterioradas por los gobiernos anteriores. Reanudó los pagos de la deuda externa forjando acuerdos para nuevas líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Club de París, y cimentó su amistad

con el gobierno de Bush (padre) al firmar un nuevo acuerdo de asistencia militar y económica (Roberts y Peceny 1997). A pesar de que el Presidente traicionó el deseo de sus votantes, reinsertó exitosamente al Perú en el mercado global, mostrando una salida rumbo a la recuperación económica.

El recientemente recuperado status del Perú en la arena internacional resultó efímero; pues el autogolpe de 1992, marcó un punto crítico en sus interacciones con sus aliados globales. El autogolpe demostró ser la primera de muchas instancias en las que una variedad de actores del ámbito internacional reaccionó con ambivalencia y a menudo con mensajes contradictorios. Para conseguir su meta declarada de protección a la democracia y a los derechos humanos, el gobierno de Bush respondió con fuerza, demandando la restauración de la norma civil. Los Estados Unidos, Canadá y España cancelaron inmediatamente la ayuda no humanitaria al Perú y las naciones latinoamericanas denunciaron las acciones del Presidente. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió para considerar imponer sanciones y suspender al Perú del Grupo de Río. Pero las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) enviaron señales muy claras: si les daban a escoger entre democracia y reforma económica, ellos daban prioridad a la última sobre la primera. A pesar del clamor global contra el autoritarismo de Fujimori, durante 1992, el Banco Internacional de Desarrollo desembolsó préstamos a Perú y el Banco Mundial continuó con sus misiones. El Fondo Monetario Internacional encontró que la nación estaba cumpliendo con su Carta de Intención de 1991, y dio el pase para acceder a fondos adicionales (Stokes 1996).

La respuesta combinada de la comunidad internacional al autogolpe selló el tono para sus interacciones con el gobierno de Fujimori por el resto de su mandato. Mientras las instituciones financieras internacionales continuaban apoyando al régimen, las organizaciones globales de derechos humanos y de prensa —generalmente de acuerdo con el Departamento de Estado de los EEUU y la OEA— expresaban preocupación por

las restricciones a los derechos humanos y civiles. En el gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Drug Enforcement Administration (DEA) trabajaban cercanamente con el SIN en sus campañas antiterrorista y antinarcóticos; al mismo tiempo, el anterior embajador estadounidense Dennis Jett "hablaba sin rodeos regularmente, expresando preocupación cuando los mayores reveses de las instituciones democráticas tenían lugar o se aprobaban leyes inconstitucionales" (Youngers 2000:4). Al cooperar estratégicamente con actores claves y apaciguándolos, tanto explícita como secretamente, la alianza Fujimori-Montesinos se las arregló para empujar la balanza de aprobación internacional a su favor, hasta el final. La siguiente sección examina las particularidades de esta relación cuidadosamente coreografiada, concluyendo con los factores que malograron su delicado balance, los que llevaron finalmente a la destrucción del régimen.

Los lazos de Montesinos con el gobierno de los EEUU se remontaban a casi treinta años atrás, una relación amplia y compleja. Él inició su contacto con la CIA en la década de los años 70, cuando como un joven oficial trabajando para el gobierno militar, empezó a pasar documentos a los EEUU sobre compras de armas soviéticas (Krauss 2000b). En la nominación de Montesinos para recibir una beca del Departamento de Estado bajo el Programa de Visitantes Internacionales, la Embajada de los EEUU envió un cable diciendo que él tenía un "considerable potencial de liderazgo... [Su] mayor interés son los aspectos militares y de seguridad y económicos de las relaciones internacionales. [Él] quiere discutir estas áreas con autoridades del Estado, Defensa, Consejo de Seguridad Nacional y la CIA". Después de la visita, el embajador Dean escribió que la invitación de la embajada a Montesinos había estado pendiente "desde hace tiempo", y que él lo consideraba "un valioso contacto de la embajada" (National Security Archive 2001). El viaje de 1976, que Montesinos había hecho sin obtener permiso de sus superiores, fue fatídico para su carrera militar. Fue

detenido al regresar, pasó dos años en prisión por "falsedad y desobediencia", y fue dado de baja de las Fuerzas Armadas.

Manteniendo su relación con el gobierno de los EEUU a lo largo de la década de los años 80 —mientras simultáneamente se convertía en abogado defensor de traficantes de drogas—, Montesinos se convirtió en su principal contacto con el régimen de Fujimori desde el principio (Krauss 2000b, *Caretas* 2000, Youngers 2000). En octubre de 1990, un informe del Departamento de Inteligencia del Ejército de los EEUU comunicó que, de acuerdo a tres oficiales retirados del ejército, "El presidente Fujimori está en el bolsillo del Servicio Nacional de Inteligencia... y es particularmente influido por Vladimiro Montesinos". El documento añadía que el Perú enfrentaba una "situación en la que el aparato de inteligencia está en efecto gobernando el país" (National Security Archive 2001). Incluso después de conocer la participación de Montesinos en casos militares que implicaban desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, el gobierno de los EEUU mantuvo su contacto y apoyo para el jefe de espías y el régimen de Fujimori.

Según el *Washington Post* (De Young 2000), la embajada estadounidense en Lima vio con sospecha los lazos con la CIA restablecidos por Montesinos. Por su parte, la DEA era reticente de verse envuelta con el "abogado", cuya reciente clientela había incluido traficantes de drogas. Sin embargo, la CIA defendió enfáticamente a Montesinos durante la década de los años 90. La relación evolucionó a través de la primera presidencia, mientras el SIN y las Fuerzas Armadas derrotaban la amenaza guerrillera que había afectado al Perú por más de una década.

Aunque se revelaron varios casos de abusos de los derechos humanos que fueron directamente relacionados con las Fuerzas Armadas y el SIN —y, por extensión, con Montesinos— la CIA persistió en defenderlo. Al comienzo de la segunda presidencia en 1995, la lucha contra Sendero Luminoso había virtualmente terminado. La conexión entre la CIA y Montesinos

fue entonces explicada como una necesidad justificada por la llamada guerra contra las drogas. En la medida en que emergieron preguntas acerca de abusos de los derechos humanos y civiles, cada vez más flagrantes, la defensa de Montesinos por parte de la CIA se hizo cada vez más firme. En octubre de 1996, los senadores Patrick J. Leahy y Christopher J. Dodd escribieron al director de la CIA, John Deutch, recordándole que las nuevas regulaciones de la CIA "prohibirían cualquier relación de inteligencia con él [Montesinos]" (De Young 2000).

Durante una reunión que incluyó a representantes de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, la CIA respaldó energéticamente a Montesinos, afirmando que no había evidencia directa de que estaba involucrado en abusos de los derechos humanos, y que su ayuda era indispensable en la lucha contra el narcotráfico. En 1996 y 1998, varias fotos de Montesinos conversando con el director de la política contra drogas de la Casa Blanca, Barry R. McCaffrey, fueron difundidas públicamente. La relación de los Estados Unidos con Montesinos floreció mientras la lucha contra el narcotráfico en la región andina ganaba fuerza (De Young 2000).

Para finales de la década de los años 90, el Departamento de Estado de los EEUU, junto con muchas organizaciones de derechos humanos, había documentado en forma laboriosa, abundante y explícita, numerosos incidentes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad peruanas bajo la dirección de Montesinos.¹⁹ Sin embargo, aunque el gobierno de los Estados Unidos tomaba conciencia de los abusos perpetrados por el aparato militar y de inteligencia, igualmente incrementó su apoyo financiero al régimen. Según el Center for International Policy, la mayor parte de estos fondos fue transmitida a través del programa de Control Internacional de Narcóticos (INC) del Departamento de Estado. Fondos del INC cubrían "equipo, entrenamiento, erradicación y otros programas... ". Las cifras muestran cómo fue aumentando el apoyo:

19 Ver, por ejemplo, U.S. Department of State (2001).

Año	Fondo de Asistencia	Ayuda policial y militar
1996	US\$ 18 500 000	US\$ 12 350 000
1997	US\$ 25 750 000	US\$ 8 975 000
1998	US\$ 32 000 000	US\$ 13 245 000
1999	US\$ 75 540 000	US\$ 43 572 000
2000	US\$ 80 000 000	US\$ 48 710 000 ²⁰

Para 1998, el Perú ya era el mayor recipiente de asistencia estadounidense en el hemisferio. Si bien cayó a un segundo lugar en 1999 (cuando se lanzó el Plan Colombia), todavía recibía la mayor parte de sus donaciones bilaterales de los EEUU.

La democracia y los derechos humanos pasaron a un segundo plano ante las preocupaciones urgentes de la producción de narcóticos y del terrorismo; y el gobierno de Clinton encontró en Fujimori y Montesinos a unos aliados cooperativos. Además de proveer información de inteligencia referente a los movimientos guerrilleros, los peruanos permitieron a los EEUU encargarse de una amplia campaña de erradicación de sembríos de coca a la fuerza —a un costo importante para los productores de coca y con poco efecto en los traficantes— y colaboraron prontamente en proveer información de inteligencia sobre las actividades de los traficantes de drogas.²¹ La producción y tráfico de droga declinó de manera significativa a mediados de la década de los años 90, ayudando grandemente a los EEUU en su lucha contra las drogas. Si el gobierno de los Estados Unidos conocía de la ilícita implicación de Montesinos

20 Consultar la siguiente dirección: www.ciponline.org/facts/pe.htm.

21 Ver Clawson y Lee (1996); "A crop that refuses to die," *The Economist*; March 4, 2000; y *Cuestión de Estado* entrevista con Coletta Youngers, n.º 2-28, Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas, 2001. De acuerdo a la entrevista, había un "conflicto tremendo" entre la CIA y la DEA relacionado con los tratos de los EEUU con Montesinos, pues sabían de su cercanía con traficantes de drogas. Youngers afirma que la CIA no solamente sabía de las pasadas actividades de Montesinos, sino que también era consciente de su relación con la venta de armas a las guerrillas colombianas. Montesinos fue abogado defensor de muchos narcotraficantes antes de convertirse en asesor del Presidente y Director del SIN."

con el tráfico de drogas, así como de la colaboración explícita o implícita de Fujimori, preferían mirar a otro lado con el fin de alcanzar metas más urgentes.²²

Por su parte, Fujimori debe haber reconocido la atención de segundo plano que la comunidad internacional prestó a los temas sobre derechos humanos y democracia. Sin tener repercusiones de aquellos que lo respaldaban en el exterior, criticó consistentemente a las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, acusando a las últimas de entrometerse en los asuntos internos del Perú. Atacó informes de Amnistía Internacional y, como se mencionó previamente, retiró al país de la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos cuando falló contra el régimen (U.S. Department of State 2001). Quejas de Freedom House y otras organizaciones internacionales de derechos humanos referentes a problemas con la libertad de prensa cayeron en oídos sordos, así como otras condenas internacionales sobre las tácticas autoritarias de Fujimori. Reveladoramente, a pesar de que los EEUU y la OEA habían denunciado implacablemente las descaradas irregularidades del Presidente en las elecciones del 2000 —con la OEA retirando eventualmente a su delegación en signo de protesta—, después de que los resultados fueron anunciados la comunidad internacional se resignó a cinco años más con Fujimori y se preparó a trabajar con el Presidente para "limpiar" su gobierno.²³

22 El 27 de agosto de 1996, un agente de la DEA escribió un informe titulado "Oficiales corruptos", en el que detallaba las afirmaciones de "El Vaticano" sobre la implicación de Montesinos con el tráfico de drogas. Si bien el agente no confirmó ni negó los cargos, comentó: "Es bien conocido que Montesinos fue abogado defensor de muchos narcotraficantes antes de convertirse en asesor del Presidente y Director del SIN".

23 De acuerdo con el *New York Times*, después de las elecciones los EEUU "parecían más o menos resignados a la continuación de Fujimori en el poder, a la vez que trabajaban por intermedio de la OEA para fomentar reformas que suavizaran el estilo autoritario del líder peruano" (Perlez 2000).

A pesar de aceptar tácitamente los resultados de las elecciones, las relaciones de los EEUU con el Perú se deterioraron progresivamente en el 2000. La ruptura comenzó a mediados de 1999, llegando a su punto culminante en setiembre del 2000, con el escándalo del soborno de Montesinos. Las agencias comprometidas en la determinación de la política de los EEUU hacia Perú convergieron finalmente en el 2000, trastornando el balance de la legitimidad de Fujimori. Con la caída de Montesinos, su socio en el crimen y "Rasputín", el Presidente no tenía otra elección que la de dirigirse, rápida y tranquilamente, hacia una salida. La confluencia de eventos que rodearon su partida concluye este estudio.

DÉNOUEMENT

Durante los años de gobierno de Fujimori, las interacciones de los EEUU con el Perú tuvieron lugar en una serie de instituciones y agencias que estaban de acuerdo con sus diferentes —y a veces contradictorios— objetivos de política. A través de su participación en el BID, FMI y el Banco Mundial, junto con sus influencias en las IFIs, EEUU apoyó fuertemente la agenda de libre mercado de Fujimori, incluyendo su exitosa revisión de la agencia recaudadora de impuestos y del Banco Central. A través del Departamento de Estado, especialmente del programa de Iniciativas Democráticas de USAID, así como de los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Clinton intentó promover la democracia y los derechos humanos. La CIA y la DEA trabajaron con el aparato militar de inteligencia para combatir el terrorismo, recoger información de inteligencia y reducir la producción y el tráfico de drogas. Al final, la mayoría de estos actores estuvieron de acuerdo en que el gobierno de Fujimori se había vuelto pasivo, dejando de ser lo activo que había sido en la década de los años 90.

De acuerdo con su compleja política multiagencias dirigida al Perú, el gobierno de los EEUU expresó su desapropa-

ción al régimen de Fujimori a través de una combinación de medios, tanto públicos como encubiertos. En la esfera pública, el caso de Baruch Ivcher atrajo la atención de los Congresistas Jesse Helms y Benjamin Gilman, que eran los presidentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, respectivamente. En junio de 1997, Helms y Gilman escribieron una carta a Fujimori, expresando su preocupación por el caso Ivcher; afirmaron que el énfasis peruano en su origen israelí era "particularmente desagradable y olía a lo peor de los estereotipos antisemitas". La carta no tuvo respuesta. En octubre de 1998, Helms y Gilman enviaron otra carta, expresando una mayor preocupación sobre el asunto y reclamando porque la situación había empeorado. Esta carta tampoco tuvo respuesta del presidente Fujimori.²⁴

A mediados de 1999, el Congreso de los EEUU se había enterado no sólo de las restricciones a la libertad de prensa del régimen, sino que empezó a expresar dudas sobre el proceso en marcha para la elección del Presidente para un tercer período. En octubre de 1999, seis senadores de ambos partidos, dirigidos por Jesse Helms, presentaron la Resolución 209, "expresando preocupación por la interferencia con la libertad de prensa y la independencia de las instituciones judiciales y electorales en el Perú".²⁵ Las razones fundamentales de la resolución enumeraban las áreas de preocupación: el despido de jueces antifujimoristas; la manipulación del Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones; los ataques del servicio de inteligencia contra periodistas y la prensa en general; y, una vez más, el trato hostil, la persecución y el arresto al dueño del Canal 2, Baruch Ivcher. El Congreso de los EEUU, que había destinado cerca de US\$ 600 millones para

24 Fuente: www.ivcher.com.

25 S. Res. 209 (106th Congress) fue presentada por el Senador Jesse Helms (R-NC) y copatrocinada por Leahy (D-VT), Coverdell (R-GA), Dodd (D-CT), Dewine (R-OH) y Jeffords (R-VT).

ayudar a la administración Fujimori entre 1996 y el 2000,²⁶ había empezado a desaprobar algunas de las tácticas del régimen para permanecer en el poder.

En marzo del 2000, el Congreso de los EEUU elevó la temperatura, aprobando una resolución conjunta que amenazaba con una acción económica contra el régimen, si juzgaba que las elecciones de abril no eran limpias. La resolución decía lo siguiente:

Si las elecciones del 9 de abril del 2000, no son consideradas por la comunidad internacional libres y justas, EEUU **modificará sus relaciones políticas y económicas con el Perú, incluyendo su apoyo para los préstamos financieros al Perú**, y trabajará con otras democracias en este hemisferio y en otros lugares, hacia la restauración de la democracia en el Perú. (S. J.Res. 43, énfasis mío)

Después de las elecciones de abril, en las que ningún candidato obtuvo el 50% del voto popular requerido —a pesar de que el oficialismo reclamó haber ganado más del 49%— los EEUU y la OEA presionaron a Fujimori a realizar una segunda vuelta. Dada la severidad de las consecuencias contenidas en la Resolución 43, complementada con una intensa presión interna, Fujimori aceptó ir a la segunda vuelta. Su rival, Alejandro Toledo, se retiró de la campaña, citando excesivas irregularidades en el proceso. El Presidente ganó la segunda vuelta realizada en mayo; una vez más, habiendo por lo menos calmado superficialmente a sus críticos, asumió el gobierno el 28 de julio.²⁷

26 De USAID, citado en Youngers (2000; 70).

27 La mayor expresión del descontento popular fue la "Marcha de los Cuatro Suyos" en julio del 2000, una demostración masiva que tenía la intención de evitar la inauguración presidencial. Debido a los daños y varias muertes, producto de la marcha, el gobierno usó los medios de comunicación para acusar a sus organizadores de haber fomentado la violencia. La opinión pública sobre la eficacia de la marcha fue variada, pero los manifestantes cumplieron con dar su mensaje de repudio.

El tercer período empezó con una presidencia disminuida: en junio, aún antes de la inauguración, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, en una misión especial, urgieron a Fujimori a poner mayor énfasis en la eliminación del fraude y reinstaurar el estado de derecho. También le dijeron, claramente, que el SIN necesitaba ser reformado y que Montesinos tenía que salir del gobierno. En respuesta, Fujimori hizo varios gestos para apaciguar a sus aliados internacionales.

Después de años de presión estadounidense y a pesar de la tremenda oposición nacional, el 29 de agosto del 2000, Fujimori declaró que la sentencia de cadena perpetua de la ciudadana estadounidense Lori Berenson había sido conmutada y que iba a ser juzgada nuevamente en una corte civil. Berenson fue arrestada en 1995, y acusada de traición por su supuesta afiliación con el grupo terrorista MRTA (*Movimiento Revolucionario Túpac Amaru*). Ella fue juzgada en una corte militar, encontrada culpable y sentenciada a cadena perpetua.²⁸ Desde 1995 al 2000, el gobierno de los EEUU hizo numerosos pedidos de clemencia, todos los cuales cayeron en oídos sordos, ya que la mayoría de peruanos creía que Berenson era culpable y se había opuesto firmemente a que la juzgaran nuevamente o la liberaran.²⁹ El Presidente se encontró ante un dilema: ¿debía responder a sus votantes y dejar que Berenson cumpliera su sentencia en la cárcel? o ¿debía responder a aquellos que lo respaldaban en el exterior y permitir que la juzgaran nuevamente en una corte civil? Su decisión de otorgarle un nuevo juicio, ilustra la manera como Fujimori buscaba al final resta-

blecer su legitimidad, dando prioridad a las demandas de sus benefactores estadounidenses por encima de las de los votantes peruanos.

Además de sus gestos públicos, el mismo mes Fujimori y Montesinos decidieron congraciarse con los actores secretos de la política de los EEUU, la CIA. Montesinos convocó a una conferencia de prensa el 21 de agosto, anunciando triunfante el descubrimiento del SIN, de una mafia internacional que supuestamente estaba vendiendo armas a los rebeldes colombianos, las FARC. El plan, diseñado para mejorar la reputación del SIN y por ende la de su líder de facto, tuvo todo el efecto contrario.³⁰ Una semana después se reveló que las armas, hechas en Jordania, habían sido vendidas a autoridades militares peruanas, quienes a su vez las habían traficado a las FARC.³¹ En vez de lograr el objetivo deseado, la revelación —que fue hecha pública por autoridades colombianas y jordanas— parece haber sido un punto de ruptura en las relaciones del aparato de inteligencia peruano con su contraparte estadounidense (Cotler y Grompone 2000:71, 157). Si bien la CIA y la DEA habían estado atentas a los alegatos de corrupción dentro del Ejército Peruano y del SIN, el tráfico de armas emergió en un momento especialmente inoportuno. El Perú había asumido un papel clave ayudándolos en la crecientemente impredecible y violenta región andina, especialmente en el programa antinarcóticos del billón de dólares de los EEUU, el Plan Colombia. Al traicionar esta alianza, el gobierno Fujimori-Montesinos agravó abruptamente las relaciones con la comunidad de inteligencia estadounidense.

28 Para informes minuciosos del caso Berenson, ver Levi y Mineo (2000) y el website de los Berenson: www.freelori.org.

29 En un sondeo de opinión pública de setiembre del 2000, más de la mitad de los peruanos encuestados expresaron su desaprobación por la decisión de Fujimori. Una sorprendente mayoría (73%) declaró que creía que Berenson era una militante activa, líder o simpatizante del MRTA (Apoyo Opinión y Mercado S.A.). *Resumen Semanal*, al anunciar su nuevo juicio, se refiere a Berenson como "la emerretista norteamericana". (*Resumen Semanal*, 8/30/00-9/5/00)

30 Ver *Caretas*, 31 agosto, 2000.

31 Uno de los mercaderes de armas afirmó, posteriormente, que además de los 50000 AK-47 originales que Montesinos arregló para comprar en 1998, los peruanos también habían presentado una "lista de compras" por un valor de más de US\$ 50 millones para armas antiaéreas, equipos de comunicaciones y equipos para modernizar tanques. De acuerdo con el *New York Times*, los peruanos "también querían comprar una gran cantidad de misiles rusos SA-7...". (Golden 2000: 3)

Para empeorar las cosas, menos de un mes después la televisión peruana difundió un video mostrando claramente a Montesinos sobornando a un miembro de un partido de oposición, Alberto Kouri, para que se cambiara al partido del Presidente. A la luz del escándalo, Montesinos huyó una semana después buscando asilo político en Panamá. Posteriormente, regresó al Perú y el Presidente —en un desesperado esfuerzo para salvar su propia carrera— escenificó un esfuerzo dramático de búsqueda para encontrarlo y juzgarlo, lo que al final no tuvo éxito.³²

Aunque el origen del video permanece desconocido, hay mucha especulación sobre la relación del gobierno de los EEUU con su difusión. A finales de septiembre el *Latin American Weekly Report* escribió:

Está creciendo la impresión de que el retiro ordenado de Montesinos fue el resultado de un acuerdo entre Lima y Washington; un proceso que empezó con la transferencia de la estadounidense Lori Berenson del fuero militar al civil y fue empujado un poco más lejos con la información compartida de inteligencia sobre la operación de armas jordanas y la inexplicable aparición pública de la cinta de Montesinos. (LAWR 2000: 445)

Si bien el video llegó a ser de dominio público, su difusión y la subsiguiente búsqueda de Montesinos no pudieron resucitar la credibilidad del Presidente. Antes que expresar indignación o sorpresa ante la evidencia altamente pública e incriminatoria del video, Fujimori respondió a los dos días convocando a elecciones presidenciales para el año siguiente, afirmando que no participaría como candidato. Él estaba claramente implicado en los negocios sucios de su —por largo tiempo— aliado, tal como videos y testimonios adicionales revelarían en los meses siguientes. Si, como este artículo argumenta, la legitimidad es

32 Al momento de escribir este artículo Montesinos había sido capturado en Caracas y su extradición al Perú estaba pendiente.

otorgada y quitada por aquellos que respaldan a un líder (*constituents*) sobre una base diaria, la de Fujimori fue irrevocablemente extraída con la vil caída de Montesinos.

El 25 de octubre del 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de ayuda extranjera solicitando aproximadamente US\$ 125 millones para programas de asistencia en el Perú. La ley contenía una previsión indicando que la ayuda sería suspendida si el gobierno de Fujimori no hacía "progresos sustanciales", dirigidos a la realización de elecciones limpias y al respeto por los derechos humanos, la libre expresión y el estado de derecho. La cláusula fue incluida a pedido formal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, perdido por Jesse Helms. Aunque la ley de ayuda no pedía explícitamente la salida de Fujimori, Marc Theissen, vocero del Comité, expresó claramente el sentimiento del grupo: "Ha llegado el momento. Fujimori tiene que irse" (CNN 2000). Menos de un mes después, se había ido.

EPÍLOGO

La caída de Fujimori ha desatado un diluvio de información sobre las operaciones secretas del régimen. Hay evidencia de que Montesinos escondió más de US\$ 50 millones en cuentas en bancos suizos durante la década de los años 90, y cada día hay más revelaciones de extorsión, robos, soborno y coerción. Puede que el panorama completo de las actividades del anterior gobierno nunca surja. Hay, sin embargo, lecciones importantes que pueden ser aprendidas de este oscuro período, no sólo para el Perú sino también para el futuro de las relaciones EEUU-Latinoamérica.

En el Perú, tanto el gobierno de transición como el de Alejandro Toledo (elegido en junio del 2001) dieron grandes pasos al investigar y procesar los crímenes del régimen anterior. Con el establecimiento de la Comisión de la Verdad y el examen de las violaciones a los derechos humanos y otros abusos de los aparatos de inteligencia militares, la nación está experimentando una catártica auto limpieza que sólo puede hacerla

más fuerte. Las elecciones del 2001 fueron internacionalmente consideradas libres y justas, muy lejos de lo que habían sido las del año anterior. Algunas de las leyes decretadas para el beneficio político de Fujimori han sido revertidas —como el distrito electoral único para los candidatos al Congreso— y el Poder Judicial y el Legislativo se están reconstituyendo gradualmente. El presidente Alejandro Toledo representa la mejor esperanza para el futuro del Perú: es un candidato mestizo cuyo paso de una vida sin recursos económicos a una de riqueza, inspira esperanza en una población destrozada por la pobreza; posee, además, una educación de la Universidad de Stanford y una experiencia de trabajo en el Banco Mundial. Mientras persista un gran objetivo a ser alcanzado en el Perú, tanto política como económicamente, su nueva administración puede empezar a reconstruir la nación de una manera más democrática y justa.

La comunidad internacional, especialmente los EEUU, puede aprender una gran lección de la debacle de Fujimori. En el lado positivo, los esfuerzos multilaterales para fortalecer las instituciones democráticas y condenar los abusos de los derechos humanos demostraron ser fructíferos. La OEA, junto con el Centro Carter y el Instituto Democrático Nacional, jugaron un papel clave en la supervisión y arbitraje de los procesos electorales, denunciando efectivamente las irregularidades y pidiendo mejoras en el sistema.

En sus operaciones secretas, sin embargo, el gobierno de los EEUU debería reexaminar su papel y relaciones no sólo con el Perú sino con toda la región andina. Después de décadas de alianzas con figuras dudosas como Montesinos (cuyas acciones son reminiscencias de otro antiguo amigo de los EEUU, Manuel Noriega), la CIA debería determinar si el beneficio de la recolección de inteligencia ha superado el costo de apoyar autoridades siniestras y corruptas. La política de los EEUU hacia Latinoamérica debe ser consistente y constructiva, no plagada con mensajes contradictorios como los transmitidos al gobierno de Fujimori. Las relaciones abiertas, transparentes, que den

prioridad a la democracia, al desarrollo económico, al estado de derecho y a la protección de los derechos humanos básicos deberían caracterizar nuestras alianzas; y los EEUU harían bien en conducir el hemisferio hacia estas metas comunes a lo largo de todo el siglo XXI.

CRONOLOGÍA DEL PRESIDENTE y DE SU JEFE DE INTELIGENCIA

1973	Montesinos sirve de asesor a varios ministros durante los regímenes militares de Velasco y Morales Bermúdez.
Set. 1976	Montesinos es dado de baja del Ejército después de un viaje no autorizado a los Estados Unidos. Pasa dos años en una prisión militar, acusado de "falsedad y desobediencia".
Fines de la década de los años 70	Montesinos trabaja como abogado, defendiendo a traficantes de drogas.
1983	Se reabre el caso de traición de Montesinos; viaja a Ecuador.
1986-1989	Montesinos sirve como intermediario entre el Ejército y las autoridades del Estado y como informante para el SIN.
1990	Montesinos se une a la campaña de Fujimori para "arreglar" los problemas de evasión de impuestos y otros problemas legales del candidato.
Junio 1990	Alberto Fujimori es elegido Presidente.
1991	Montesinos se convierte en asesor presidencial y CONFIDANT, jefe no oficial del SIN.
Nov. 1991	Masacre de "Barrios Altos", atribuida al grupo Colina, implicando a agentes del SIN. ³³
Abril 1992	Autogolpe, Fujimori cierra y disuelve el Congreso, con participación activa de Montesinos.
Set. 1992	El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es capturado.
1993	Se convoca a elecciones para el Congreso Constitucional.

33 Sobre la implicación del SIN en violaciones a los derechos humanos ver Rospigliosi (2000), Roberts y Peceny (1997) y Youngers (1994, 2000).

Jul. 1992 Masacre de "La Cantuta".
 Abril 1993 Víctimas de "La Cantuta" son descubiertas.
 Feb. 1994 El grupo Colina es sentenciado.
 1993 La nueva Constitución es ratificada, permitiendo la reelección presidencial.
 1995 Fujimori es reelecto Presidente.
 Junio 1995 Se aprueba la ley de Amnistía. El grupo Colina sale de la cárcel.
 Ago.1996 "El Vaticano" es arrestado, testifica haber pagado a Montesinos US\$ 50 000 cada mes, durante 1991 y 1992.
 Se aprueba la "*Ley de interpretación auténtica*" que certifica que Fujimori ha servido sólo un período bajo la nueva Constitución, haciendo legalmente posible su reelección.
 Abril 1997 Son rescatados los rehenes de la residencia del embajador japonés. Los secuestradores del MRTA son ejecutados durante la operación de rescate.
 1998 Comienza la recesión económica.
 Dic. 1999 Fujimori se reúne con la Secretaria de Estado de los EEUU, Madeleine Albright.
 Enero 2000 Se inicia el Plan Colombia.
 Abril 2000 Fujimori y su oponente Alejandro Toledo pasan a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
 Mayo 2000 Toledo retira su candidatura, citando fraude. Fujimori es elegido para un tercer período.
 Julio 2000 Fujimori asume el poder en medio de una protesta masiva conocida como la "Marcha de los Cuatro Suyos".
 Ago.2000 Montesinos convoca a una conferencia de prensa sobre la venta de armas a las FARC, resultando en la revelación su propia implicación en el tráfico de armas.
 Set.2000 Se difunde el video de Montesinos sobornando al congresista Alberto Kouri con US\$ 15 000 para que se cambie al grupo político del Presidente.
 Montesinos huye a Panamá.
 Oct. 2000 Fujimori convoca a elecciones presidenciales a llevarse a cabo en el 2001; se compromete a supervisar la transición.

Nov. 2000 Montesinos regresa al Perú y desaparece.
 Fujimori viaja a Japón, envía su renuncia por fax.
 Valentín Paniagua es nombrado Presidente interino.
 Abril 2001 Se realizan las elecciones presidenciales, Alejandro Toledo y Alan García ocupan el primer y segundo puesto, respectivamente, forzando una segunda vuelta.
 Junio 2001 Alejandro Toledo es elegido Presidente. Montesinos es arrestado en Venezuela.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALBI, Carmen Rosa
 1992 "Del golpe del 5 de abril al CCD: Los problemas de la transición a la democracia", *Pretextos* 3-4. Lima: DESCO.
- CAMERON, Maxwell A. and MAUCERI, Philip, eds.
 1997 *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy*. College Park: Penn. State Press.
- CAMERON, Maxwell A.
 1997 "Political and Economic Origins of Regime Change in Peru: The *Eighteenth Brumaire* of Alberto Fujimori", en Maxwell A. Cameron, and Philip Mauceri, eds., *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy*. College Park: Penn. State Press.
- Caretas*
 2000 *Montesinos: Toda la historia*. Lima: Caretas Dossier.
 1998 "Agente Zanatta: La historia completa", 1508, marzo 19.
 1997 "El embajador y el oidor", 1477, agosto 7.
- Centre for the Study of Democracy
 2000 Peru Elections 2000: A Public Education Website, (<http://qsilver.queensu.ca/peru/home.shtml>), Kingston, Ontario: Queen's University.
- CLAWSON, Patrick L. y Lee III, Rensselaer W.
 1996 *The Andean Cocaine Industry*. New York: St. Martin's Press.

- CNN
2000 "Peru's political crisis could cost it U.S. aid", [http://europe.cnn.com/2000 /US/10/26/us.peru.ap/index.html](http://europe.cnn.com/2000/US/10/26/us.peru.ap/index.html), Oct. 26.
- COLLIER, Ruth Berins y David COLLIER
1991 *Shaping the Political Arena*. Princeton: Princeton University Press.
- CONAGHAN, Catherine
1998 "Fear, Loathing and Collusion: Press and State in Fujimori's Peru", Paper presented at Latin American Studies Association meetings, Chicago.
1995 "Polls, Political Discourse, and the Public Sphere: The Spin on Peru's Fuji-golpe", en Smith, Peter H., *Latin America in Comparative Perspective*. Boulder: Westview Press.
- COTLER, Julio
1995 "Political Parties and the Problems of Democratic Consolidation in Peru", en Mainwaring and Scully, eds. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.
- COTLER, Julio y Romeo GROMPONE
2000 *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- CRABTREE, John
1998 "Neo-populism and the Fujimori Phenomenon", en Crabtree and Thomas, eds. *Fujimori's Peru: The Political Economy*. London: Institute of Latin American Studies.
- CRABTREE, John y Jim THOMAS, eds.
1998 *Fujimori's Peru: The Political Economy*. London: Institute of Latin American Studies. [existe edición en castellano del IEP y la Universidad del Pacífico, 1999. N. del E.]

- DE BELAÚNDE, Javier
1998 "Justice, Legality and Judicial Reform", en Crabtree, John and Thomas, Jim, eds. *Fujimori's Peru: The Political Economy*. London: Institute of Latin American Studies.
- DEGREGORI, Carlos Iván
2000 *La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- DEGREGORI, Carlos Iván y Romeo GROMPONE
1991 *Elecciones 1990: Demonios y redentores en el nuevo Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- DEYOUNG, Karen
2000 "The 'Doctor' Divided U.S. Officials", *Washington Post*, Sept. 22.
- FIGUEROA, Adolfo
1998. "Income Distribution and Poverty in Peru", en Crabtree and Thomas, eds., *Fujimori's Peru: The Political Economy*. London: Institute of Latin American Studies.
- FITCH, J. Samuel
1998 *The Armed Forces and Democracy in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- GOLDEN, Tim
2000 "C.I.A. Links Cited on Peru Arms Deal That Backfired", *New York Times* A3, Nov. 5.
- GRAHAM, Carol
1994 "Introduction", en Tulchín, Joseph and Bland, Gary, eds., *Peru in Crisis: Dictatorship or Democracy?* Boulder: Lynner Rienner Publishers.
- GRAHAM, Carol y Cheikh KANE
1998 "Opportunistic Government or Sustaining Reform? Electoral Trends and Public-Expenditure Patterns in Peru, 1990-1995", *Latin American Research Review*, vol. 33, n.º1.

Ideele
2000 "¿Hasta el 2005?" n." 129, julio. Lima: Instituto de Defensa Legal.

INEI
1996 *Perú: Acceso a los programas sociales*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

KRASNER, Stephen D., ed.
1993 *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press.

KRAUSS, Clifford
2000a "OAS Mission to Peru Says Intelligence Boss Must Go", Clifford Krauss, *New York Times*, June 30.
2000b "Our (and Their) Man in Peru," *New York Times*, Oct. 8.

Latin American Weekly Report
2000 "As Montesinos flees judicial reckoning, Peru's opposition suspects a big scam", WR-00-38, Sept. 26.

LEVI, Jonathon y Liz MINEO
2000 "The Lori Berenson Papers", *The Nation*, Sept. 4.

LINZ, Juan J.
1978 *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Re-equilibration*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

LINZ, Juan J. y Alfred STEPAN
1996 *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

MAINWARING, Scott y Timothy R. SCULLY, eds.
1995 *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.

MARCUS-DELGADO, Jane
1999 *The Logic of Presidential Legitimacy and Neoliberal Reform in Argentina and Peru*. Ph.D. dissertation, School

of Advanced International Studies, Johns Hopkins University.

National Security Archive
2001 "Fujimori's Rasputin: The Declassified Files on Peru's Former Intelligence Chief, Vladimiro Montesinos", Electronic Briefing Book 37, www.gwu.edu/~nsarchive.

Documentos de FOIA revisados:

Enero 1976 Cable, Dpto. de Estado de la Embajada de los EEUU en Lima.
Abril 1977 Cables del Dpto. de Estado del embajador Dean, "Detention of Vladimiro Montesinos".
Oct. 1990 "Counterintelligence Periodic Summary"
Ago. 1996 Informe DEA, "Corrupt Officials"
Dic. 1996 "Counterintelligence Periodic Summary"

PERLEZ, Jane
2000 "Election Decision by Peru President Gives U.S. Concern", *New York Times*, Sept. 18.

REYNA, Carlos
2000 *La anunciación de Fujimori: Alan García 1985-1990*. Lima: DESCO.

ROBERTS, Kenneth and PECENY, Mark
1997 "Human Rights and United States Policy Toward Peru", en Cameron and Mauceri, eds. *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy*. College Park: Penn. State Press.

ROBERTS, Kenneth M.
1995 "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case", *World Politics* n.º 48.

ROJAS, Isaías
2000 "Operativo reelección en interiores", *Ideele*, 125, febrero. Lima.

- ROSPIGLIOSI, Fernando
2000 *Montesinos y las fuerzas armadas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- SAGASTI, Francisco y GUERRA-GARCÍA, Gustavo
1997 "La modernización del poder ejecutivo: Problemas y posibilidades", *Socialismo y Participación* 78. Lima: CEDEP.
- SANBORN, Cynthia Ann
1991 *The Democratic Left and the Persistence of Populism in Peru: 1975-1990*. Ph.D. dissertation, Harvard University.
- SHEAHAN, John
1999 *Searching for a Better Society: The Peruvian Economy from 1950*. University Park: Penn State University Press. [Existe edición en castellano del IEP, 2001. N. del E.]
1994 "Peru's Return Toward an Open Economy: Macroeconomic Complications and Structural Questions", *World Development*, vol. 22, n.º 6.
- STOKES, Susan
1996 "Peru: The Rupture of Democratic Rule", en Domínguez, Jorge and Lowenthal, Abraham, eds., *Constructing Democratic Governance*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
1995 *Cultures in Conflict: Social Movements and the State in Peru*. Berkeley: University of California Press.
- Transparencia
2000 *Una historia que no debe repetirse: Perú Elecciones generales 2000*. Lima: Transparencia.
- U.S. Department of State
2001 *Country Reports on Human Rights Practices*, State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (www.state.gov/www/global/human_rights/drl_reports.html).

- VARGAS LLOSA, Mario
2000 "Pobredumbre terminal", en *Montesinos: Toda la historia*. Lima: Caretas Dossier.
- WEBER, Max.
1947 *The Theory of Social and Economic Organization*. Trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons. New York: Oxford University Press.
- WEYLAND, Kurt
1999 "Neopopulism and Market Reform in Argentina, Brazil, Peru and Venezuela", paper presented at Latin American Studies Association meetings, Miami.
1998 "Swallowing the Bitter Pill: Sources of Support for Neoliberal Reform in Latin America", *Comparative Political Studies*, vol. 31, n.º 5.
- WISE, Carol
2001 *Reinventing the State: Economic Strategy and Institutional Change in (forthcoming) Peru*. Versión preliminar.
1994 "The Politics of Peruvian Economic Reform: Overcoming the Legacies of State-Led Development", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 36, n.º 1.
- YOUNGERS, Coletta A.
2000 *Deconstructing Democracy: Peru Under President Alberto Fujimori*. Washington: Washington Office on Latin America.
1994 *After the Autogolpe: Human Rights in Peru and the U.S. Response*. Washington: Washington Office on Latin America.
- ZIMMERMAN ZAVALA, Augusto
1997 *El espía de Fujimori: Descubiertos sus secretos*, Lima: IMPREPSA.

¿CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA?
DETERMINISMO, VOLUNTARISMO, ACTORES Y
PODERES ESTRUCTURALES EN EL PERÚ, 1980-2000¹

MARTÍN TANAKA²

En este texto se analizan los avatares de la democracia en el Perú en el período 1980-2000, cuestionando imágenes convencionales que enfatizan, para entender el quiebre del régimen democrático y el colapso del sistema de partidos, el peso de variables históricas de diverso tipo; y para explicar la caída del fujimorismo, el peso de su crisis de legiti-

-
- 1 Una primera versión de este trabajo fue preparada para la conferencia *Advances and Setbacks in the Third Wave of Democratization in Latin America*. The Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, 23-24 de abril de 2001. Agradezco los agudos comentarios de Frances Hagopian, Scott Mainwaring y Gretchen Helmke a esa primera versión. El texto también fue discutido en una aguerida "Mesa Verde" en el Instituto de Estudios Peruanos en el mes de agosto del 2001; agradezco mucho los comentarios y críticas de Carlos Contreras, Julio Cotler, Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone. Creo que en aquella reunión comprobamos que también se avanza en el conocimiento sobre la base de la polémica y la disensión. Si es que los lectores encuentran que este texto sirvió para cuestionar algunas ideas fuertemente arraigadas sobre la política peruana en las últimas dos décadas, habrá cumplido con su cometido.
- 2 Martín Tanaka es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Actualmente es investigador asociado y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. E-mail: mtanaka@iep.org.pe.

midad. Por el contrario, se defiende aquí que lo decisivo en ambos casos fueron las acciones y omisiones de los principales actores políticos y poderes estructurales; se sostiene que en el Perú, en el período estudiado, los procesos políticos estuvieron siempre abiertos a desenlaces diversos, situación propia de una *coyuntura crítica* y de situaciones de reestructuración.

INTRODUCCIÓN

En la literatura sobre política comparada se registra una clara mudanza de enfoques, que se expresa en el paso de una suerte de optimismo asociado a la literatura de las transiciones y de la consolidación de la democracia, a una suerte de pesimismo expresado en la literatura que precisamente llama la atención sobre sus límites. En este sentido, se ha señalado correctamente que es necesario pensar la democracia más allá de enfoques minimalistas y centrados exclusivamente en el ámbito del régimen político; 'el desatender asuntos sociales, institucionales e históricos, hace que se pierdan de vista aspectos esenciales para entender el funcionamiento de la democracia.

Creo que el caso peruano permite analizar estas discusiones teóricas de manera ejemplar. Con la transición política de finales de la década de los años 70, tuvimos la ocasión de construir una comunidad política democrática que terminó con una larga historia de exclusión y autoritarismo. El nuevo régimen incorporó plenamente, por primera vez, al APRA y a una izquierda emergente; y estableció el sufragio universal, en un contexto de intensa movilización y participación social. Lamentablemente, la década de los años 80 terminó con una inflación de 7 650% en 1990, más de 25 000 muertos y 5 000 desaparecidos por violencia política acumulados en la década; y la llegada al poder de un *outsider* como Fujimori a la presidencia. En la década de los años 90, empezamos con un auto golpe (abril de

3 Ver, entre muchos otros, O'Donnell, 2000; Encarnación, 2000; Agüero, 1998; Linz y Stepan, 1996.

1992) aprobado por más del 80% de la población, y tuvimos luego la reelección del líder autoritario en 1995, que instauró un régimen que alcanzó niveles de corrupción insospechados, difícilmente vistos antes en nuestra historia. A la luz de la discusión esbozada más arriba, las desventuras de la democracia en el Perú se podrían explicar por su carácter elitista, por su vigencia precaria sólo en el ámbito de las elecciones y del régimen político, pero sin enraizarse en un Estado de derecho consolidado, en valores democráticos compartidos por las elites y la ciudadanía, en el ejercicio pleno de derechos sociales de la mayoría. Esto habría erosionado la legitimidad de la democracia y abierto paso al autoritarismo fujimorista. Creo, sin embargo, que el carácter aparentemente evidente de esta explicación es precisamente su mayor defecto. Esta supuesta claridad inhibe un examen crítico de los acontecimientos y deja de lado evidencias que apuntan en otros sentidos.

Siendo específico, lo que llamaría una visión convencional diría más o menos lo siguiente: el Perú inició su período democrático despertando muchas expectativas; lamentablemente, se empezó arrastrando un legado de grandes debilidades, por lo que el Perú se constituyó en un caso de consolidación democrática sumamente incierta. Se comenzó con graves problemas estructurales, precariedad estatal e institucional, debilidad de los principales actores políticos y sociales, falta de una cultura democrática en el país en general y el predominio de una cultura de enfrentamiento en las elites.⁴ Encerradas en la vieja cultura criolla y oligárquica, éstas perdieron contacto con una población crecientemente mestiza, "informal", que poco a poco empezó a buscar nuevos rumbos.⁵ Así, el peso de la historia no tardaría en expresarse en conflictos que a su vez desencadenaron crisis económica, violencia política y una creciente polarización ideológica y social. Los principales partidos políticos alternaron posiciones de gobier-

4 Sobre este tipo de argumentos ver Cotler, 1994 y 1995.

5 Sobre este tipo de argumentos ver Degregori y Grompone, 1991.

no y se mostraron sucesivamente incapaces de solucionar los problemas; esto generó, a la larga, una crisis de representación que involucró al conjunto de la clase política, lo que permitió la llegada al poder de un *outsider* como Fujimori, expresión de los cambios ocurridos en el país y del fracaso de las elites tradicionales.⁶

Fujimori, actuando de manera autoritaria y enfrentándose a las restricciones institucionales expresadas en la Constitución de 1979 ya sus protagonistas, los partidos políticos, logró triunfar, dada la extrema falta de legitimidad de éstos. Así puede entenderse el éxito de su "autogolpe", de abril de 1992, que mereció una altísima aprobación ciudadana. El problema fue que el autoritarismo de Fujimori no hizo sino profundizarse a lo largo del tiempo, amparado en una cultura caudillista tradicional, en la desarticulación de las instituciones de la sociedad civil, en la destrucción del sindicalismo y de los gremios en general; y avanzar en un proyecto de reestructuración del país pensado por un sector de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional (expresado en el "Plan Verde"), que implicó el control de todas las instituciones del Estado. Esta dinámica tuvo como consecuencia lógica la extensión de diversas formas de prepotencia, manipulación, control y corrupción, que minaron muy lentamente las bases de legitimidad del régimen.

A dicho régimen se enfrentó una parte cada vez más numerosa de la ciudadanía (particularmente los jóvenes), especialmente en las elecciones del año 2000, siendo Alejandro Toledo la expresión de este proceso. A pesar de su aislamiento y falta de legitimidad, el fujimorismo pretendió vana y desesperadamente mantenerse en el poder, pero terminó colapsando ante las múltiples evidencias de corrupción de un régimen au-

6 Sobre este tipo de razonamientos ver Lynch, 1999; López, 1992; y Kenney, 2000.

7 Pueden verse caracterizaciones diversas del fujimorismo en Arias, 2001; Cotler, 2000; Degregori, 2000; Grompone, 2000; Quijano, 2000; y Vega Centeno, 2000. Ciertamente, cada uno de estos textos amerita un análisis cuidadoso por separado, que no me es posible realizar aquí; con todo, creo

toritario que devino en una mafia inserta en el poder.⁷ Así, los peruanos tenemos nuevamente al frente, por méritos propios, la posibilidad de reencontrar el camino de la democracia.

Este recuento tiene sin duda muchos elementos de verdad. Sin embargo, creo que es también una descripción muy parcial de lo que verdaderamente ocurrió en los últimos años. Un examen cuidadoso muestra que se recurre a explicaciones deterministas para explicar el colapso de la democracia y a explicaciones que se centran en la crisis de legitimidad para explicar la caída del fujimorismo, dejándose siempre de lado lo que considero fundamental: las mediaciones políticas, las acciones y omisiones de los actores políticos y poderes estructurales.

Veamos primero las explicaciones sobre el colapso de la democracia y el sistema de partidos a finales de la década de los años 80. Aquí, generalmente, se apela al peso de la historia dejándose de lado procesos y acontecimientos que revelan, a mi juicio, que la historia estuvo siempre abierta a desenlaces diversos. El Perú podría perfectamente haber seguido tendencias regionales, en las cuales, en medio de grandes dificultades, los sistemas de partidos evolucionan, pero no colapsan. La imagen convencional sugiere que el peso de la historia no logró ser superado, sugiere la idea de que la semilla de la democracia en el Perú no logró fructificar por no tener un suelo propicio. Creo que este tipo de razonamiento minimiza la capacidad de acción y responsabilidad de las elites, y nos hace caer en la falacia del "determinismo retrospectivo".⁸ Según ésta, se reconstruye la historia a partir de su desenlace, seleccionando las evidencias que son congruentes con éste, dejando de lado otras que sugieren otros desenlaces, igualmente posibles, desnaturalizando la comprensión de los procesos.⁹ No es que la historia

que pese a sus muchas diferencias, comparten en lo básico el diagnóstico esbozado.

8 Ver Bendix, 1964

9 Esto implica, en cierto modo, esbozar argumentos de corte "contrafáctico", cuya utilidad está siendo rescatada por las ciencias sociales. Ver Lebow, 2000. Ciertamente, para que un argumento contrafáctico sea válido, debe

estuviera ineludiblemente determinada en el sentido que fue, más todavía por la circunstancia histórica que pasamos en las décadas de los años 80 y 90: una *coyuntura crítica*,¹⁰ un momento de reestructuración, marcado precisamente por su fluidez, imprevisibilidad, volatilidad, en el que las acciones de los actores terminan teniendo consecuencias de mediano y largo plazo.

Consideremos ahora las explicaciones sobre la naturaleza del fujimorismo y su caída. Mayoritariamente se invoca, para explicar ésta última, a la acción de fuerzas que el análisis de la naturaleza del fujimorismo había descartado; así, se habla de la resistencia civil, de la movilización social, del protagonismo de actores sociales como claves, cuando a la vez se dice que el autoritarismo debilitó en extremo las capacidades de respuesta de la sociedad como parte de su proyecto. Otro ejemplo de inconsistencia se da al postularse en la argumentación una capacidad de manipulación casi ilimitada del régimen (de allí su persistencia), y a la vez llamar la atención sobre su fragilidad y vulnerabilidad (al explicar su caída). Finalmente, se manejan —a menudo— modelos de acción abiertamente contradictorios de los diversos actores: por ejemplo, se afirma que Fujimori habría convocado a elecciones cercado por los escándalos de corrupción, las protestas ciudadanas y su crisis de legitimidad, cuando en el análisis previo de su intento de reelección se asume por el contrario que Fujimori jamás fue sensible a esas presiones y que actuó básicamente motivado por una lógica de poder e imposición.

En suma, encuentro en las interpretaciones vigentes un eclecticismo desmedido, cuando no abiertas contradicciones en los razonamientos. Como ya he señalado, mi interés es detenerme en la explicación de las acciones y omisiones de los actores políticos y poderes estructurales. El peso de estos últimos se ha hecho mayor en los últimos años y es decisivo para explicar

estar muy acotado en cuanto a sus alcances y ser susceptible de un control mínimo; para esto, la perspectiva comparada resulta sumamente pertinente.
10 Collier y Collier, 1991.

el colapso del fujimorismo, dado que nunca se produjo propiamente una reconstitución de los actores políticos y sociales que marcaron la dinámica de la década de los años 80. En términos teóricos, esto no significa que sólo la política cuenta y que hay que dejar otras variables de lado; lo que sí implica es que hay que especificar claramente la naturaleza de su impacto.¹¹

Así, en este trabajo propongo tesis discrepantes con las miradas convencionales sobre el proceso político peruano entre 1980 y 2000. En primer lugar, sostengo que la crisis de representación ocurrida hacia finales de la década de los años 80 e inicios de los 90 no puede ser deducida del desempeño de la democracia peruana y de sus actores en los años previos; pues estos actores eran bastante fuertes, en términos comparados, aún en 1990. Creo que para entender la elección de Fujimori en 1990 debe analizarse principalmente el peculiar proceso electoral de ese año, antes que el peso del pasado.

Segundo, sostengo que entre la elección de Fujimori y el autogolpe de abril de 1992, hubo un período de intensa lucha política que podría haber terminado con la destitución de Fujimori, siguiendo así el Perú un camino más acorde a las tendencias regionales; si ello no ocurrió fue por diversas circunstancias económicas y políticas, me refiero particularmente al afortunado —para Fujimori— *timing* político de las políticas de estabilización.

Tercero, sostengo que a pesar de que el fujimorismo se consolidó después del autogolpe de 1992, la oposición mantuvo siempre oportunidades para hacer una lucha política efectiva que evitara la consolidación de un régimen autoritario; esto es válido para diversas coyunturas ocurridas en 1993, 1995, 1998 y 2000. Si ello no ocurrió es debido a la racionalidad que rigió la conducta de los actores políticos. El fracaso de la oposición

11 Creo que esto no es tomado en cuenta por quienes manejan implícitamente concepciones sustantivistas de entender la democracia; ver por ejemplo Grompone, 2000.

al fujimorismo en constituirse en alternativa, permitió que éste ejerciera un poder sin contrapesos, por lo que fácilmente devino en un régimen autoritario (y corrupto).

Cuarto, sostengo que el fujimorismo consistió en un gran proyecto de transformación estructural de la sociedad peruana, en clave neo liberal y neopopulista, lo que explica el gran apoyo, complicidad o tolerancia que tuvo de los poderes estructurales y de gran parte de la población; lo que no debe perderse de vista a pesar de los enormes niveles de corrupción a los que llegó. Por ello, creo que caracterizar al fujimorismo como una "mafia" o como un régimen "sultanístico" simplifica demasiado su naturaleza y permite dejarse llevar en exceso por las sin duda escandalosas revelaciones a las que hemos asistido los peruanos en los últimos meses. La corrupción se explica, a mi entender, por la combinación de una disposición enorme (para los estándares nacionales) de recursos, con la ausencia de contrapesos y controles institucionales efectivos.

Quinto, sostengo que la caída del fujimorismo no puede deducirse de la acción de la oposición política o del vigor de movimientos sociales de protesta, extremadamente debilitados en los últimos años. La caída se explica sobre todo por el agudizamiento de las contradicciones internas de un régimen altamente personalizado, desencadenadas por presiones de actores internacionales que ganaron un poder excesivo en los últimos años.

Finalmente, creo que, en términos teóricos, el caso peruano ilustra ciertamente la necesidad de ampliar el análisis teórico de la democracia más allá de los límites del régimen político, más allá de visiones minimalistas; pero creo, también, que ilustra la importancia de no perder de vista la autonomía del campo político y de especificar cuidadosamente de qué maneras otras esferas de la vida social se relacionan e impactan en éste.

LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80 ¹²

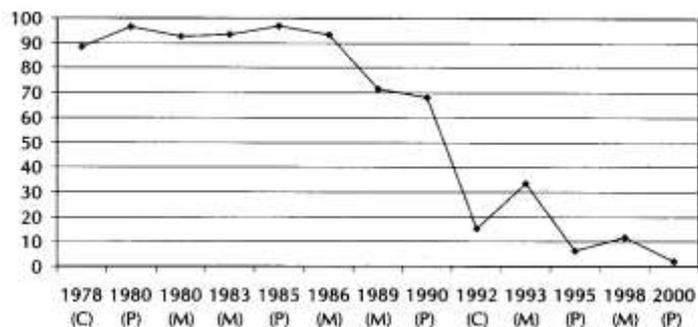
Como ya he mencionado, mi tesis sostiene que no puede afirmarse que la crisis de representación del sistema de partidos en el Perú de finales de la década de los años 80 e inicios de los 90, pueda deducirse de su desempeño en toda la década de los años 80. Si evaluamos la representación del sistema de partidos que sustentó este período democrático, veremos que hasta apenas semanas antes de las elecciones de 1990, e incluso después de ellas, el sistema era bastante representativo, contra lo que indica el sentido común imperante. Analicemos el desempeño del sistema de partidos a lo largo de la década de los años 80, en tres aspectos críticos: su fortaleza en el terreno electoral, sus vínculos con organizaciones representativas de la sociedad civil y el compromiso de los actores políticos con el sistema democrático.

Respecto al desempeño del sistema de partidos en la arena electoral, encontramos que entre 1978 e incluso hasta la primera vuelta de la elección presidencial de 1990, los cuatro principales actores del sistema de partidos concentraron la gran mayoría de las preferencias electorales (ver gráfico 1). Estamos hablando de una tendencia sumamente clara, expresada consistentemente en ocho procesos electorales entre 1978 y 1990: en 1978, en la elección para Asamblea Constituyente; en las elecciones presidenciales de 1980, 1985 y 1990; y en las elecciones municipales de 1980, 1983, 1986 y 1989. En la elección de 1978, la suma de los votos por estos actores alcanzó el 88.5%; desde entonces, y hasta las municipales de 1989, fue superior al 90%. En estas elecciones el porcentaje disminuyó un poco, al 71.5%. Y en la primera vuelta de la elección presidencial de 1990, en la que ganó Mario Vargas Llosa, disminuyó un poco más, al 68%. Ciertamente, siempre hubo indicios de una gran debilidad de los partidos, expresada en los altos índices de volatilidad electoral, desde el comienzo mismo del régimen

12 Un desarrollo extenso de estas ideas puede encontrarse en Tanaka, 1998.

democrático. Sin embargo, pese a los drásticos cambios en las preferencias electorales, ellas siempre, hasta 1990 inclusive, se encuadraron dentro de los márgenes del sistema de partidos.

Gráfico 1: Perú: voto por partidos políticos «tradicionales», 1978-2000



Perú: voto por partidos políticos "tradicionales", 1978-2000. Los datos de 1978 y 1992 corresponden a la elección de Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente, respectivamente; las elecciones de 1980, 1985, 1990, 1995 Y 2000 corresponden a resultados de elecciones presidenciales; las elecciones de 1980, 1983, 1986, 1989, 1993, 1998 corresponden a elecciones municipales.

Merece un comentario sobre la tendencia declinante que se observa desde las elecciones municipales de 1989. Viendo las cifras hoy, sabiendo de antemano los resultados de las elecciones sucesivas, es fácil decir que el colapso empezó en las elecciones municipales de 1989. Sin embargo, en ese momento, nadie tenía cómo saberlo. Hasta la elección presidencial de 1990, el sistema de partidos mostraba todavía una fortaleza bastante significativa. Precisamente, una de las razones que llevó al golpe de Estado de abril de 1992 fue la debilidad de la bancada del gobierno en el Congreso electo en 1990, su posición minoritaria y la correlativa fortaleza de los partidos. Como puede verse en el cuadro 1, la suma de los escaños del FREDEMO (Frente Democrático, alianza formada por AP, el PPC y el Movimiento Libertad), del APRA y de los dos grupos en los que se dividió la izquierda (Izquierda Unida e Izquierda Socia-

lista) alcanzó 182 escaños, de un total de 242 en las dos cámaras (el 75.2% del total).

Cuadro 1: Composición del Congreso 1990-1992

Partido	Diputados	Senadores	Total
FREDEMO	63	21	83
(AP)	(27)	(8)	(35)
(PPC)	(25)	(5)	(30)
(Libertad)	(11)	(8)	(19)
PAP	53	17	70
Cambio 90	32	14	46
IU	16	6	22
FIM	7	0	7
IS	4	3	7
FNTC	3	1	4
Otros	3	0	3
Total	180	62	242

De otro lado, la votación obtenida por los actores del sistema de partidos en 1990, no presagiaba en absoluto el futuro colapso del sistema; por el contrario, insinuaba una evolución, siguiendo tendencias regionales. Es interesante analizar los datos peruanos en relación con los de otros países; como veíamos, en la primera vuelta de la elección presidencial de 1990, los partidos principales concentraron el 68% de los votos, cifra nada desdeñable. En Bolivia, por ejemplo, la suma de los votos del MNR, ADN y MIR llegó al 63.9% en la elección presidencial de 1985; al 65.3% en la de 1989 y al 54.1% en la de 1993; en esta última elección, CONDEPA alcanzó el 13.6% y la UCS el 13.1 % de los votos. Así, tenemos un cuadro de evolución del sistema partidario, no de colapso de los actores principales.¹³ En Argentina, la suma de los votos del justicialismo y el partido radical, en las elecciones presidenciales, pasó de un 92.2% en 1983 a un 79.9% en 1989 y a un 66.9% en la elección de

13 Datos tomados de Gamarra y Malloy, 1995.

1995, en la que el FREPASO superó al radicalismo.¹⁴ Pese a que este 66.9% implica un importante declive, suena descabellado pensar que en Argentina esto anunciara la desaparición del mapa político argentino del justicialismo o del radicalismo.

Una segunda muestra del funcionamiento del sistema de partidos es su capacidad de intermediar en lo político los intereses y las demandas de los principales grupos de interés y movimientos sociales. Acá encontramos que lejos de tener vínculos débiles con estas organizaciones, por el contrario los partidos tuvieron relaciones muy estrechas; hasta podría decirse que ellas eran demasiado estrechas, al punto que implicaban prácticamente una indistinción entre las esferas política y social.¹⁵

Los partidos de izquierda, por ejemplo, crecieron y se desarrollaron estrechamente ligados a las organizaciones sociales. Por lo general, los dirigentes sociales eran a la vez militantes de los partidos y solían responder a las directivas partidarias. Dicho argumento es desarrollado más claramente por Gonzales y Samamé (1991), quienes explican algunas de estas relaciones. Así, encontramos que la más importante central nacional de trabajadores, la Confederación General de Trabajadores (CGTP), que agrupaba básicamente sindicatos en el sector industrial, era "hegemonizada" por el Partido Comunista Peruano (PCP); el principal sindicato de maestros, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) era hegemonizado por la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR), organización maoísta; las dos principales organizaciones campesinas, la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) eran hegemonizadas por el Partido Unificado Mariateguista (PUM) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR), respectivamente. La lista podría seguir.

14 Datos tomados de Gervasoni, 1997. Los resultados de las elecciones legislativas y constituyentes muestran una tendencia similar.

15 Estas constataciones concuerdan con lo señalado por Touraine (1989) sobre la dinámica política en América Latina, la cual tiene como una de sus características la ausencia de autonomía de la sociedad frente a la política.

Esto en cuanto a las organizaciones populares. En lo que respecta a las organizaciones empresariales, también encontramos relaciones estrechas con organizaciones políticas. Los empresarios tuvieron a lo largo de la década de los años 80, relaciones fluidas con los partidos situados a la derecha del espectro político, particularmente con el PPC. Durante la segunda mitad de la década de los años 80, durante el gobierno de Alan García (1985-1990), la relación entre empresarios y partidos de derecha se hizo más estrecha, especialmente a partir de julio de 1987, al anunciar García el proyecto de ley de estatización del sistema financiero. Como respuesta, el conjunto de la clase empresarial reaccionó furiosamente en contra. El PPC y AP lucharon en contra del proyecto desde el parlamento y organizaron mítines y manifestaciones en las calles, conjuntamente con líderes de los gremios empresariales. Paralelamente, surgió además el Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa y un conjunto de personalidades independientes. Tiempo después, a inicios de 1988, nació el Frente Democrático (FREDEMO) compuesto por el Movimiento Libertad, AP y el PPC. Las relaciones entre los empresarios y este frente político nunca fueron más estrechas. Muchos connotados ex líderes de gremios empresariales pasaron a ser líderes del movimiento y candidatos al Congreso.

Un tercer criterio para evaluar el funcionamiento del sistema de partidos es el grado de compromiso de los actores políticos con las reglas de juego democrático, en términos de respeto al pacto político expresado en la Constitución de 1979. Y no me refiero aquí al escrupuloso cumplimiento de todos y cada uno de sus artículos, cosa que es un criterio excesivo para evaluar el funcionamiento del sistema de partidos. Pienso en el respeto a lo que podríamos llamar el "*pacto fundamental*" surgido en el proceso de transición, a la luz de la correlación de fuerzas establecido en las elecciones de 1978 para la Asamblea Constituyente. Se partía de un diagnóstico básico: el electorado peruano se dividía gruesamente en tres tercios, cortados ideológicamente en torno a un clivaje de izquierda/derecha. A

la izquierda se sitúan los diversos grupos de izquierda, que luego se unificarían en IU, al centro el APRA ya la derecha AP y el PPC; por lo cual ninguna fuerza por sí sola podría aspirar a constituirse en una fuerza hegemónica del sistema de partidos. La consecuencia de este diagnóstico era que tenía que establecerse un compromiso en torno al pluralismo y alternancia en el poder, de manera que ninguno de los actores buscara acabar con el sistema en caso de ser derrotado, sino que mantuviera la esperanza de ser ganador en las elecciones siguientes.

Las reglas básicas de esa competencia política, este pacto fundamental al que hago referencia, se respetaron; las elecciones y las reglas de juego constitucionales se convirtieron en el mecanismo principal de dirimir las diferencias políticas, y los cálculos electorales guiaron la conducta de los partidos, que se comportaron como actores estratégicos. Esto cuestiona la imagen de partidos con una ideología excesiva y enfrentados en una suerte de dilema del prisionero, como explicación del colapso del sistema. Pese a que hubo polarización, ésta no desbordó los márgenes del sistema. La izquierda legal se mantuvo en su mayoría alejada de los proyectos antisistema como los de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Y los actores de derecha, en su mayoría, no siguieron el camino de "tocar las puertas de los cuarteles" y propiciar un golpe militar. Ello se expresó en diversos momentos críticos a lo largo de la década de los años 80, en significativas reuniones y conversaciones entre los líderes de las tres fuerzas principales, que reafirmaban simbólicamente el compromiso con las reglas de competencia democrática. Pero, sobre todo, tenemos que varios intentos de golpe de Estado fueron conjurados —a lo largo de la década de los años 80 e inicios de los 90— por la confluencia de la clase política en torno a la defensa del orden constitucional. Especialmente importante en este sentido es la coyuntura, particularmente difícil, entre la segunda mitad de 1988 y la primera de 1989, de la que hablaremos más adelante, signada por la crisis y práctica descomposición del gobierno aprista.

De este modo, creo que puede afirmarse que el sistema de partidos en el Perú de la década de los años 80 funcionó al menos cumpliendo requisitos mínimos de representatividad, y que resultaba medianamente razonable pensar en sus posibilidades de evolución a partir de 1990, siguiendo tendencias regionales. En todo caso, lo que me parece importante resaltar es que *el principal desafío del sistema de partidos* —a inicios de la década de los años 90— no era enfrentar un problema de *representación* sino de *gobemabilidad*, en el contexto de muy diversos proyectos políticos, algunos de ellos excluyentes entre sí, en pugna por la hegemonía en el país. El sistema de partidos era el espejo, por más distorsionado que estuviese, en el que parecía reflejarse la sociedad en la esfera de la política.

EL COLAPSO DEL SISTEMA DE PARTIDOS: EL FUJIMORISMO Y EL AUTOGOLPE DE 1992

De este modo, encontramos que los actores políticos no estaban en absoluto en situación de crisis terminal hacia finales de la década de los años 80. Esto desbarata la tesis según la cual el 5 de abril de 1992, aparece como consecuencia del mal desempeño de los actores en la década previa. Con todo, no puede negarse que hacia finales de dicha década se produjo una crisis de representación (aunque, insisto, de ella no puede deducirse el colapso del sistema) que permitió la llegada de Fujimori a la presidencia. Entender esto requiere no tanto ver la década de los años 80, sino específicamente el proceso electoral de 1990.

Encontramos que los protagonistas de estas elecciones aparecían relativamente fuertes. De un lado teníamos a la derecha, recompuesta a través del FREDEMO. Después del gobierno de AP-PPC (1980-1985) la derecha pasó a una posición claramente minoritaria; sin embargo, rápidamente se reconstituyó como FREDEMO en 1987, renovada ideológicamente en torno a un programa neoliberal y también en cuanto a liderazgos, esta vez bajo la conducción del escritor Mario Vargas Llosa. Esto hizo que en las elecciones municipales de 1989 ya

apareciera nuevamente como la primera fuerza política. El FREDEMO apareció siempre como uno de los favoritos para ganar las elecciones generales de 1990, es más, las ganó, pero sin mayoría absoluta, por lo que hubo que ir a una segunda vuelta, la que ganó Fujimori.

El APRA, pese a la crisis de su gobierno desde 1988, logró manejar una difícil situación de alta inflación y aparecía como una opción electoral importante. En las elecciones municipales de 1989 el APRA obtuvo una votación notoria (20.4%), es más, en las elecciones de 1990 el candidato Luis Alva Castro estuvo cerca, en algún momento de la campaña, de pasar a la segunda vuelta junto con Vargas Llosa; de hecho, Luis Alva Castro obtuvo un 20% de los votos en la elección presidencial de 1990. Finalmente, tuvimos a la izquierda, que constituía un actor muy competitivo. La Izquierda Unida, con Barrantes, apareció durante todo 1988 y parte de 1989 como la gran favorita para ganar las elecciones de 1990. Alfonso Barrantes podría haber sido el primer presidente marxista electo en la historia del Perú y el segundo en América Latina, después de Salvador Allende. Es así como, entrando al proceso electoral de 1990, nada hacía presagiar los resultados finales. Tampoco podía preverse el desenlace de los hechos, incluso después de la llegada al poder de Fujimori, como veremos.

Sostengo que el sorprendente triunfo de Fujimori en las elecciones de 1990, se explica por el proceso electoral mismo, en donde los factores decisivos son la división de la IU (después de su congreso de "unidad" en enero de 1989), los errores de campaña del FREDEMO y el apoyo a Fujimori por parte de Alan García; todo esto en el contexto de un sistema electoral demasiado permisivo.¹⁶ Con todo, pese al triunfo de Fujimori, como ya se ha dicho, los partidos tenían un amplio control del Congreso y seguían siendo los actores más importantes. En este escenario, Fujimori optó por enfrentarse a los partidos y al orden institucional; éstos optaron por tratar de manejar al dé-

¹⁶ No serían tan importantes factores estructurales o históricos. Sobre las elecciones de 1990 ver Schmidt, 1996, con cuyo análisis concordamos.

bil e inexperto Fujimori, pensando en las elecciones de 1995, en las que Fujimori no podría competir, dada la prohibición de la reelección presidencial inmediata estipulada por la Constitución de 1979.

¿Por qué el débil e inexperto Fujimori, enfrentado además a terribles problemas (hiperinflación y violencia terrorista), con minoría en el Congreso, cercado por la oposición y por el ordenamiento institucional, logró en abril de 1992, encabezar con éxito un autogolpe? El desenlace es más extraño si comparamos a Fujimori con Bucaram en Ecuador, Collor en Brasil o Serrano Elías en Guatemala. Estos presidentes también se enfrentaron a sus Congresos, valiéndose de un discurso antipolítico, aprovechándose de la pérdida de legitimidad de éstos, pero perdieron, siendo destituidos. De hecho, este desenlace podría haber ocurrido en el Perú; si observamos los niveles de aprobación de Fujimori, encontraremos que éstos se mantuvieron altos y con tendencia ascendente entre agosto y diciembre de 1990, en un promedio de 54%, para luego bajar entre enero y setiembre de 1991 a un promedio de 38.5% (ver gráfico 2). Si bien la inflación fue sustancialmente rebajada, comparada con los años anteriores, todavía se mantenía bastante alta: la inflación acumulada de 1991 fue de 139.2%. Hacia inicios de marzo de 1991, la desaprobación a Fujimori, medida en febrero, era cercana al 50%, y su aprobación estaba alrededor de un 33%, según diversas encuestas. Se vivía una sensación de fracaso del programa económico, vinculado a los saltos inflacionarios de diciembre de 1990 (23.7%) y enero de 1991 (17.8%). Pese a que la inflación promedio mensual se estabilizó relativamente entre febrero y setiembre de 1991, se ubicaba en un nivel promedio de 7.7%, todavía muy alto. En el plano de la violencia, Sendero Luminoso proclamaba haber llegado al "equilibrio estratégico", etapa previa a la ofensiva que lo llevaría a tomar el poder. Incluso, en marzo se empezó a discutir en el Congreso la posibilidad de destituir a Fujimori y hacer que la presidencia fuera asumida por el primer vicepresidente, entonces presidente del senado, Máximo San Román.

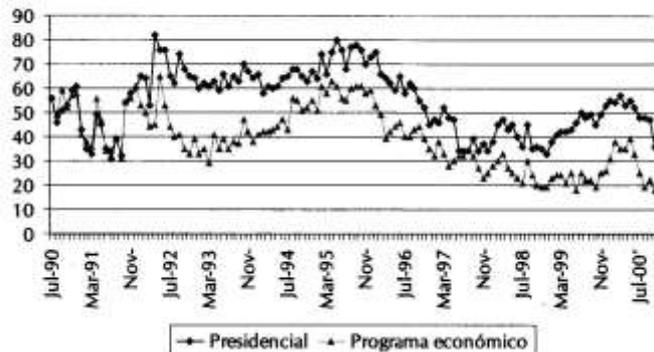
Gráfico 2: Aprobación de la gestión presidencial y de la oposición



Aprobación de la gestión presidencial y de la oposición, 1990-2000. Datos para Lima metropolitana del Instituto Apoyo.

Creo que, vistas las cosas desde la situación del primer semestre de 1991, una de las perspectivas más probables para Fujimori era la de terminar siendo destituido por el Congreso o, en el mejor de los casos, haciendo muchas concesiones a la oposición. En este cuadro, la decisión de los partidos de enfrentarse a Fujimori y procurar ponerle límites aparece plenamente racional. ¿Por qué Fujimori logró imponerse allí donde otros presidentes de la región fracasaron? Creo que la diferencia decisiva está en el hecho de que Fujimori logró estabilizar a tiempo la economía, a diferencia de los casos brasileño o ecuatoriano; ello le permitió superar su aislamiento y construir la comunidad de intereses o la coalición que terminó sustentando al gobierno después del 5 de abril. La tasa de inflación mensual, que entre enero y setiembre de 1991 se ubicó alrededor de un 7.7%, bajó consistentemente a partir de octubre; entre ese mes y febrero de 1992, bajó a un promedio de 3.9%. Ello tuvo un claro correlato sobre el nivel de aprobación presidencial, que pasó de un promedio de 38.5% entre enero y setiembre de 1991, a un promedio de 60% entre octubre de 1991 y febrero de 1992 (ver gráfico 3).

Gráfico 3: Aprobación de la gestión presidencial y del programa económico, 1990-2000



Aprobación de la gestión presidencial y del programa económico 1990-2000. Datos de Apoyo para Lima metropolitana.

A mi juicio, de haber intentado Fujimori su "autogolpe" hacia mediados de 1991, habría fracasado, de manera similar a la de Serrano Elías en Guatemala, país con partidos acaso más débiles que los del Perú, pero que lograron sobreponerse a los embates de un líder antipartido. El *timing* del golpe, entonces, resulta lo fundamental. Fujimori vivía en el momento del golpe una coyuntura claramente favorable; es esa coyuntura, marcada por signos claros de estabilidad y expectativas de mejora hacia adelante, lo que legitimó el autogolpe de abril de 1992. Al consolidarse un orden autoritario, se legitimó un discurso y práctica antiinstitucionales y, correlativamente, se descolocaron y colapsaron los partidos y el sistema de partidos de la década de los años 80.¹⁷

En otros países, como Bolivia con Paz Estensoro, Argentina con Menem o Brasil con Cardoso, sus presidentes, como Fujimori, tuvieron éxito en estabilizar las economías en el con-

17 Algo similar puede verse en la actualidad en Venezuela con Chávez, después de su elección en 1998, a pesar de la indudable fortaleza del sistema de partidos en el período previo.

texto de la adopción de políticas neo liberales. A diferencia del Perú, en estos casos el cambio de modelo se realizó dentro de los márgenes del sistema de partidos. El reto principal fue llevar adelante los cambios en las identidades partidarias tradicionales de manera creíble y ordenada, lo que implicó difíciles reconversiones en las identidades partidarias básicas de sus países. El caso peruano, a mi juicio, se alejó de este camino por la inesperada llegada de un *outsider* a la presidencia, que estableció una dinámica política totalmente distinta, que opuso su gobierno al conjunto del sistema de partidos.

LA CONSOLIDACIÓN DEL FUJIMORISMO, LA TRANSICIÓN FALLIDA DE 1995 Y SU CONVERSIÓN EN UN RÉGIMEN AUTORITARIO ¹⁸

Desde abril de 1992 en adelante, el fujimorismo vivió un proceso de consolidación, tanto en el terreno de la economía como en el terreno de la lucha antsubversiva. En cuanto a lo primero, el gobierno logró una sustancial y sostenida reducción de la inflación, como muestran elocuentemente los datos del cuadro 2.

Cuadro 2: Evolución de la inflación (fuente: INEI)

1988	1 722.3
1989	2 775.3
1990	7 649.6
1991	139.2
1992	56.7
1993	39.5
1994	15.4
1995	10.2
1996	11.8
1997	6.5
1998	6.0
1999	3.2

18 Un desarrollo de las ideas expuestas en esta parte puede verse en Tanaka, 1999a.

También se lograron importantes tasas de crecimiento del producto entre 1993 y 1995, haciendo que entre 1993 y 1998 el promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú fuese uno de los más altos que se registró en América Latina (véase cuadro 3).

Cuadro 3: Evolución del PBI (fuente: INEI)

1988	-8.3
1989	-11.7
1990	-5.4
1991	2.8
1992	-1.4
1993	6.4
1994	13.1
1995	7.3
1996	2.4
1997	6.9
1998	0.3
1999	3.8

Finalmente, el gobierno logró también la derrota estratégica de los movimientos subversivos, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, especialmente después de la captura del líder del primer grupo, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992. Esto puede verse claramente en la evolución de las acciones subversivas registradas. Es muy importante no perder de vista que Guzmán es capturado meses *después* del autogolpe, y que el número de acciones subversivas recién empezó a bajar a lo largo de 1993, por lo que resulta falsa la idea de que los "éxitos" antisubversivos de Fujimori fueron los que legitimaron el golpe (véase cuadro 4).

Cuadro 4: Número de acciones subversivas 1989-1998
(fuente: INEI y Webb y Fernández Baca, 1999)

1989	3 149
1990	2 779
1991	2 785
1992	2 995
1993	1 918
1994	1 195
1995	1 232
1996	883
1997	681
1998	310

Los éxitos que pudo exhibir Fujimori le permitieron tener una gran legitimidad, expresada en los altos niveles de aprobación a su gestión. Como puede verse en el gráfico 2, la aprobación de la gestión presidencial entre 1992 y 1996, prácticamente no bajó del 60%, y a lo largo de 1995, estuvo casi siempre por encima del 70%. Como puede verse en el cuadro 5, el promedio de aprobación a la gestión presidencial fue de 65.84% entre octubre de 1991 y octubre de 1996.

Cuadro 5: Porcentaje de aprobación a la gestión presidencial por sectores sociales (datos de APOYO para Lima Metropolitana)*

Períodos	Promedio	A	B	C	D
1) Julio - Dic. 90	54.30	44.83	47.33	55.66	61.00
2) Enero 91 - Set.91	38.00	35.66	36.22	38.66	38.44
3) Oct. 91 - Oct. 96	65.84	67.81	62.14	62.09	62.67
4) Nov. 96 - Dic. 98	39.53	38.77	33.61	38.03	42.92
5) Enero 99 - Abril 00	47.81	40.68	38.25	45.69	54.31

* Siendo A el sector social más alto y D el más bajo.

Los altos niveles de legitimidad de Fujimori consolidaron un liderazgo personalista, enfrentado al orden institucional, autoritario, con un discurso antipolítica y antipartidos. Como consecuencia de esto, en el Perú, los partidos políticos que concen-

traron más del 90% de los votos en casi todas las elecciones de la década de los años 80, hoy han prácticamente desaparecido. Además, se consolidó alrededor de Fujimori una coalición de intereses bastante fuerte en una combinación de neoliberalismo y neopopulismo.¹⁹

Las elecciones generales de 1995, en el Perú, que supuestamente debieron marcar la vuelta del país a un régimen democrático, no marcaron el inicio de la reconfiguración de un nuevo sistema de partidos. Esta podría haberse dado dentro de un formato bipartidista, en torno a dos grandes bloques, uno vinculado al fujimorismo y otro a una oposición democrática. El aplastante triunfo de aquél en 1995, sin embargo, atentó contra el desarrollo de un sistema partidario equilibrado. Fujimori obtuvo el 64.4% de los votos presidenciales y su movimiento el 52.1 % de los votos congresales; su más cercano competidor, Javier Pérez de Cuéllar, obtuvo el 21.8% de los votos presidenciales y su movimiento, Unión por el Perú (UPP), el 14% de los votos congresales. Así, en el congreso electo en 1995, surgieron claramente dos grandes bloques: el vinculado al gobierno, Cambio 90 - Nueva Mayoría, con 67 de 120 escaños y el de la oposición, encabezado por la UPP, con 17 escaños (el grupo político con mayor cantidad de escaños después de estos dos fue el partido aprista, pero con sólo 8 representantes). Lamentablemente, la UPP, lejos de consolidarse como eje de la oposición, se fue desarticulando con el paso del tiempo, expresión de ello es que su representación parlamentaria terminó siendo de apenas 2 miembros al final de su mandato.

Al no darse una recomposición del sistema de partidos y al establecerse en las elecciones de 1995, una mayoría abrumadora del fujimorismo, tenemos que el espacio vacío dejado por el sistema anterior fue ocupado por éste; y al no tener contrapesos políticos significativos, cayó fácilmente en una dinámica autoritaria, manteniéndose así en gran medida el escenario postgolpe de 1992. En otras palabras, diría que la transición esperada en 1995, no cuajó, por lo que tuvimos en esencia la

19 Ver entre otros, Kay, 1995; Roberts, 1995; Weyland, 1996; Tanaka, 2000.

prolongación de un régimen autoritario desde 1992; más todavía, su consolidación. Así, el espacio público de deliberación ciudadana quedó seriamente menoscabado, lo que produjo, en el plano de la toma de decisiones de gobierno, una centralidad excesiva de los poderes estructurales, como por ejemplo en los organismos financieros internacionales, los grandes empresarios e inversores extranjeros, los diversos grupos de poder y las Fuerzas Armadas. A esto hay que sumar el respaldo de algunos gobiernos extranjeros, particularmente el de los Estados Unidos, que consideró a Fujimori un aliado eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Es claro que esa evaluación subordinó otras consideraciones en la relación bilateral.²⁰ Como veremos más adelante, la lógica autoritaria se exacerbó notoriamente a partir de 1996, cuando el funcionamiento del gobierno empezó a estar guiado por la lógica de reelección en el 2000, para lo cual se imponía una estrategia de control de las principales instituciones del Estado; con lo cual gobierno y Estado se hicieron casi uno, de modo que podría hablarse de la configuración de un régimen autoritario, con apariencias democráticas.

OTROS DESENLACES POSIBLES

Ahora bien, ¿se pudo evitar el camino de consolidación de este régimen autoritario? La historia hasta aquí contada, centrada en el legado que deja el colapso del sistema de partidos, sugiere la imagen de un fujimorismo imbatible, donde el peso de la herencia de 1992, habría cerrado las puertas a otras opciones en los años posteriores, con un pueblo peruano abrazando sin más la opción del autoritarismo, imposibilitando una recomposición del sistema de partidos y la construcción de una oposición vigorosa. Sin embargo, las cosas en realidad no fueron tales, pese a la fortaleza del liderazgo de Fujimori. Sin negar el peso de esta herencia, también encontramos una ciudadanía crítica y decisiones de los actores que ayudan a entender el curso de los acontecimientos. Como veremos a continuación,

20 Sobre este punto ver Cotler, 1999.

las cosas fueron mucho más complejas y el escenario estuvo siempre abierto a desenlaces distintos, dependientes de las decisiones de los principales actores políticos.

El fujimorismo tuvo cinco grandes etapas, desde el punto de su legitimidad: hay una primera, la de la "luna de miel" (1990); la segunda, la de la crisis postajuste (1991, hasta el tercer trimestre); la tercera, de consolidación y hegemonía (desde fines de 1991, hasta mediados de 1996). Esta tercera larga etapa tiene dos fases, la primera signada por una legitimidad mayormente política (entre 1992 y mediados de 1993, teniendo como picos el autogolpe de abril de 1992 y la captura de Abimael Guzmán, en setiembre del mismo año), y la segunda signada por una legitimidad mayormente económica (desde mediados de 1993 hasta mediados de 1996). La cuarta etapa es la de la crisis, desde la segunda mitad de 1996 hasta inicios de 1999. Al final, tuvimos el período de la campaña electoral, durante 1999 y los primeros meses del 2000, y el derrumbe del régimen, que amerita un análisis particular más adelante (ver gráfico 2 y cuadro 2). La tercera fase, de consolidación y hegemonía, como señalé anteriormente, sugiere la imagen de un fujimorismo invencible, pero un examen minucioso de los hechos revela un panorama con muchos matices. Hubo un comportamiento "delegativo" en el electorado, pero se trató de una "delegación vigilada".²¹ En efecto, Fujimori estuvo siempre lejos de tenerlas todas consigo.

Inmediatamente después del autogolpe de abril de 1992, el gobierno se vio obligado, por presiones internacionales, a retroceder en sus acciones y a seguir un camino de retorno a una normalidad constitucional. Fujimori tuvo que convocar a elecciones para conformar nuevamente el Congreso; así, en noviembre de 1992, se llevó a cabo la elección para lo que se llamó Congreso Constituyente Democrático (CCD), con funciones de Congreso y a la vez con el encargo de redactar una nueva constitución política. Los principales actores políticos

21 Al respecto ver Balbi, 1997.

de oposición optaron por el abstencionismo, llamando a viciar el voto; el resultado fue que el voto del conjunto de la oposición al fujimorismo resultó mayor al 25%, pero repartido entre cinco grupos." La elección del CCD terminó dando mayoría absoluta al fujimorismo con un margen muy estrecho, dando éste un salto bastante importante en relación a la elección anterior, de abril de 1990. En las elecciones de 1990, Cambio 90 obtuvo el 21.7% de los votos para senadores y el 16.5% para diputados, mientras que en noviembre de 1992, Nueva Mayoría – Cambio 90 obtuvo el 49.2% de los votos; así, de un total de 80 congresistas, Nueva Mayoría – Cambio 90 obtuvo 44 escaños.²³

En el mes de noviembre de 1993, se realizó un referéndum para aprobar la nueva Constitución que sustituiría a la de 1979. Contrariamente a lo que esperaba el supuesto de un fujimorismo imbatible, el referéndum dio por resultado un "empate técnico", en medio de graves denuncias de fraude y diversas irregularidades.²⁴ La campaña del referéndum es muy importante, entre otras cosas porque estableció las bases de una unidad posible de las fuerzas opositoras al gobierno. De hecho, un conjunto muy amplio de fuerzas opositoras conformaron el "Comando de Campaña por el No", que recogió eficazmente una serie de demandas populares descentralistas, y la defensa de derechos sociales amparados por la Constitución de 1979, que resultaban reducidos en la nueva carta magna. Pese al triunfo del "Sí", la unidad registrada en la campaña por el "No" dio lugar a una serie de conversaciones para lograr una

22 El Partido Popular Cristiano (PPC), el Frente Independiente Moralizador (FIM), el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI) y Solidaridad y Democracia (SODE). Creo que el abstencionismo descolocó y sacó de escena a los partidos principales hasta ese momento (APRA, AP e IU), perdiendo entre 1993 y 1995 presencia pública y protagonismo, en un contexto de consolidación del fujimorismo y de su prédica antipolítica y antipartido.

23 Cabe señalar que si parte de los votos viciados hubieran ido a candidatos de oposición, seguramente el fujimorismo no habría obtenido mayoría absoluta.

24 El "Sí" a la nueva constitución obtuvo el 52.3% de los votos y el "No" obtuvo el 47.7%.

candidatura unitaria para la elección presidencial de 1995 (o al menos una estrategia común de enfrentamiento al fujimorismo).

Las dificultades del fujimorismo no sólo se expresaron en el referéndum de noviembre de 1993. Ese mismo año, en enero, apenas dos meses después de la elección del CCD (noviembre 1992), se realizaron elecciones municipales que constituyeron una gran derrota para los candidatos patrocinados por el gobierno. El candidato apoyado por éste en Lima, Pablo Gutiérrez, tuvo que renunciar semanas antes para no exponerse a una derrota anticipada. En el ámbito provincial, los pocos candidatos presentados por el gobierno también fueron derrotados. El fujimorismo como movimiento nunca llegó a consolidarse. Estas dificultades en el plano local se presentaron nuevamente más adelante, en las elecciones municipales de 1995 y 1998. En noviembre de 1995, se realizaron elecciones municipales en las que, nuevamente, los candidatos promovidos por el gobierno fueron derrotados. Jaime Yoshiyama (considerado el delfín de Fujimori) en Lima, quien tenía como elocuente lema de campaña "con todo el apoyo", fue derrotado por el "independiente" Alberto Andrade, del movimiento "Somos Lima", que luego se convertiría en "Somos Perú". Diversos analistas concluyeron que aquí fracasó también el intento de Fujimori de construir una suerte de "delfín", de sucesor político.²⁵

El fujimorismo no se convirtió en movimiento político porque se trató de un poder altamente personalizado, nada institucional. Desde 1990, Fujimori llegó solo, sin partido, sin organización, y armó un aparato personalizado en coalición con los poderes estructurales. Esto ayuda a entender por qué el fujimorismo optó por elegir el Congreso de 1995 y en el 2000 el distrito único nacional, sistema altamente proporcional; y ello no en circunscripciones pequeñas, en las que habría sido teóricamente beneficiado.²⁶ Distritos múltiples implican un

25 Aunque Yoshiyama perdió con un margen estrecho: Andrade obtuvo el 52.07% de los votos y Yoshiyama el 47.93%.

26 Perú 2000 obtuvo 52 escaños en las elecciones de abril de 2000. Según diversas propuestas de reforma del sistema electoral, con circunscripciones

manejo descentralizado, negociación con poderes regionales, mientras que el distrito único nacional facilita un control centralizado.

Otro indicador del espíritu crítico de la sociedad frente al fujimorismo, aún en su momento de consolidación, se registra a partir de los sucesos de La Cantuta.²⁷ A lo largo de 1993 y 1994, años en los que se investigó, la actitud encubridora del gobierno mereció una amplia desaprobación ciudadana.

Todo esto indica que la reelección de Fujimori en 1995, pese a contar con altos niveles de aprobación a su gestión, estaba lejos de poder darse por descontada. Más todavía, entre 1993 y gran parte de 1994, la candidatura opositora de Javier Pérez de Cuéllar gozó de mayor intención de voto que la de la reelección de Fujimori. Pérez de Cuéllar y su movimiento, Unión por el Perú (UPP), podría haber ayudado a la constitución de un sistema de partidos de dos fuerzas, medianamente equilibrado. El que el conjunto de la oposición a Fujimori se uniera no era un posibilidad descabellada, toda vez que se tenía como antecedente el "Comando de Campaña por el No" de 1993. Sin embargo, la oposición dejó de lado esta valiosa experiencia y enfrentó dividida el proceso electoral. Todos habrían de pagar por ello; de un lado la candidatura de Pérez de Cuéllar se fue debilitando progresivamente, Fujimori empezó a tomar la delantera en las encuestas de intención de voto hacia mediados de 1994; de otro lado, los partidos de la década de los años 80 sufrieron una derrota estrepitosa. En conjunto no pasaron

regionales, departamentales o provinciales, todas presentadas por congresistas de oposición, Perú 2000 habría obtenido entre 71 y 81 escaños. Ver Datos para la democracia, año 1, n.º 2. Asociación Civil Transparencia [http://www.transparencia.com.pe].

27 El caso La Cantuta consistió en el secuestro, desaparición y posterior asesinato de un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, como parte de una operación del ejército, en julio de 1992. El gobierno empezó negando los hechos, pero investigaciones parlamentarias y periodísticas finalmente probaron la verdad de las denuncias realizadas. El gobierno mereció una amplia desaprobación ciudadana por negar estos hechos y entorpecer las investigaciones al respecto.

del 6.32% de los votos en la elección presidencial y llegaron sólo a un 14.84% en la del Congreso.²⁸

Con todo, aún con los resultados de las elecciones de 1995, existía la posibilidad de consolidar un polo opositor alrededor de la UPP, liderada por Javier Pérez de Cuéllar. De hecho, el fujimorismo empezó lo que podemos caracterizar como su etapa de crisis hacia finales de 1996, y su declive podría haber sido capitalizado por la principal fuerza alternativa a éste en 1995. Sin embargo, la UPP, lejos de consolidarse con el tiempo, inició, por el contrario, un largo proceso de debilitamiento. Tal como Mario Vargas Llosa en 1990, el ex Secretario General de la ONU dejó el país en 1995, privando de identidad y conducción a la principal fuerza de oposición. En tanto se trató de un movimiento articulado en torno a su persona, al irse se desbocaron una serie de contradicciones internas, que hicieron que con el tiempo su representación parlamentaria y capacidad política fuera extinguiéndose.

La oposición tuvo nuevas y mejores oportunidades desde 1996. A partir de mediados de ese año, la reprobación de la ciudadanía fue mayor, pero a diferencia de lo que ocurría antes, ésta empezó a mellar la aprobación a la gestión presidencial. La desaprobación empezó a aumentar y llegó a emparejar a la aprobación hacia finales de 1996 y la primera mitad de 1997, para ubicarse por encima de ésta hasta mediados de 1999 (ver gráfico 2: la desaprobación supera la aprobación cuando esta última va por debajo del 45%, aproximadamente). Diversos trabajos muestran que el cambio en los niveles de aprobación se relaciona con la crisis económica, con la recesión, con la percepción de que las cosas empeoraban en el terreno económico. Desde inicios de 1996, la aprobación al programa económico del gobierno empezó a descender; y desde finales de 1996, hasta el final del fujimorismo, los niveles de desaprobación fueron mayores a los de aprobación (gráfico 3).²⁹ Antes, sucesos

28 Sobre el proceso electoral de 1995, ver Schmidt, 1999.

29 Ver Carrión, 1999.

políticos que generaban una amplia desaprobación no mellaban la popularidad presidencial, en parte porque la economía funcionaba bien. Más interesante es registrar que desde el último cuatrimestre de 1996, se produjo un avance en la aprobación de la oposición que logró ponerse, hacia mediados de 1997, al parejo con la aprobación presidencial. Desde entonces, y hasta mediados de 1999, esta paridad se mantuvo (gráfico 2).

Desde mediados de 1996, el desgaste de Fujimori se entiende por el desempeño de la economía, como ya vimos, y también por diversos sucesos ubicados en el terreno de lo político. En abril de 1996, la mayoría gobiernista en el Congreso empezó a dar disposiciones conducentes a permitir la reelección presidencial (empezando por la "ley de interpretación auténtica de la Constitución", de agosto de 1996, ley 26657)³⁰ y a limitar el ejercicio del referéndum consagrado por la Constitución de 1993 (que podría revertir muchas acciones del gobierno que generaban una amplia desaprobación ciudadana), contraviniendo claramente en el primer caso a la Constitución, al debate constituyente y a la jurisprudencia sentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),³¹ es decir, las bases legales establecidas por el propio régimen.

Como ya vimos, el fujimorismo no llegó nunca a constituirse como movimiento. Esto hizo que su continuidad pasara casi de manera necesaria por el mantenimiento personal de Fujimori en el poder. Así, puede entenderse que el gobierno haya jugado a fondo la carta de la reelección, pese a los escollos legales, constitucionales y a la alta desaprobación que generaron estas iniciativas. Las relaciones entre gobierno y oposi-

ción empezaron a jugarse desde 1996, sobre todo en torno a la constitucionalidad de la reelección de Fujimori. La oposición inició el proceso de convocatoria a un referéndum, en setiembre de 1996, cuestionando la ley de interpretación auténtica. Este proceso fue terriblemente accidentado y, según algunas encuestas de opinión, la mayoría se mostraba de acuerdo con la convocatoria a un referéndum; pues de realizarse éste, no habría sido aprobada la reelección de Fujimori. Para evitar el referéndum, el gobierno de Fujimori violó la Constitución, manipuló al Congreso, forzándolo a dar leyes inconstitucionales, y se enfrentó y desactivó el Tribunal Constitucional por medio del Congreso (mayo de 1997). En agosto de 1997, el Congreso dio una ley para evitar que se diera el referéndum, a pesar de que sus promotores habían conseguido las firmas necesarias para que éste se convocara, estableciendo que el pedido debía pasar previamente por el Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones, también controlado por el gobierno, a inicios de 1998, envió al Congreso el pedido de referéndum. Allí, sobre un total de 120 congresistas, de los cuales 67 habían sido electos por Cambio 90 - Nueva Mayoría, la oposición fracasó en conseguir 48 de los 53 votos no gobiernistas posibles para hacer posible la convocatoria.

El último episodio de las controversias en torno a la reelección del Presidente tuvo como protagonista al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El JNE también era controlado por el gobierno. Este órgano está compuesto por cinco miembros: un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, uno de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades nacionales, uno de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas y un representante del Colegio de Abogados; sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público estuvieron intervenidos y en reorganización desde 1996, así como las universidades nacionales. El final de esta larga historia es que la candidatura de Fujimori se inscribió, fue tachada y finalmente aprobada con el voto de 4 de los 5 miembros del Jurado en diciembre de 1999.

30 Según la Constitución de 1993, sólo existe reelección inmediata por un período; esta ley estableció que el primer período de Fujimori fue el de 1995, no el de 1990 (porque en 1990 Fujimori habría sido electo según la Constitución de 1979).

31 La Constitución de 1993, permite la reelección inmediata, pero sólo por una vez; el debate constituyente y el Jurado Nacional de Elecciones establecieron que Fujimori podía ser candidato presidencial en 1995, ya que aspiraba a la reelección permitida por dicha Constitución.

En suma, todo el proceso que se inició en 1996, con la "ley de interpretación auténtica", y que terminó en diciembre de 1999, reveló que el fujimorismo, si bien tuvo una legitimación electoral en 1995, operó cada vez más como un *régimen autoritario*, en el que el Estado de derecho y sus instituciones aparecían como formalidades que encubrían un enorme grado de control por parte de la cúpula en el poder. No existió, en la realidad, el equilibrio o los contrapesos institucionales mínimos que permitieran hablar de una dinámica democrática. Las instituciones estatales fueron reconstruidas a lo largo de la década de los años 90 bajo el control del fujimorismo; respondían a su lógica, por lo que se dio una superposición entre gobierno y Estado. Podríamos decir también que la exacerbada personalización del régimen, su excesiva dependencia del aparato del Estado, la debilidad de la oposición y el avasallamiento del orden institucional, permitieron los escandalosos niveles de corrupción que los peruanos hemos venido conociendo últimamente. Dentro de esta lógica de destrucción institucional, el Servicio de Inteligencia Nacional cobró cada vez mayor importancia.³²

Más allá de las maniobras y complicaciones jurídicas descritas, el hecho político es que estos sucesos mellaron la credibilidad y legitimidad del gobierno y de Fujimori. Así, la oposición logró emparejar y aventajar por primera vez al gobierno en aprobación de desempeño; en el trimestre junio-agosto de 1997: es la coyuntura de la destitución de los jueces del tribunal constitucional, las marchas estudiantiles de protesta por estos hechos, la campaña de la oposición por la realización del referéndum y otras cuestiones. Esto es algo radicalmente distinto a todo el período 1992-1996. Esta coyuntura permitió además la convergencia de sectores de oposición disímiles en torno a las mismas banderas y sobre temas sustantivos.

32 Sobre el carácter autoritario del fujimorismo ver Tanaka, 1999. Sobre el SIN ver Rospigliosi, 2000.

Así, hacia finales de 1998, la previsión más razonable respecto a las elecciones de abril de 2000 era que el ganador iba a ser Alberto Andrade, recién reelecto alcalde de Lima. Parecía imposible que el desgastado fujimorismo fuera capaz de recuperarse de un declive sistemático que ya tenía casi tres años. A pesar de ello, la oposición no logró ganar en la disputa por la hegemonía política. Es más, a lo largo de 1999, Fujimori logró una consistente recuperación en sus niveles de aceptación y de intención de voto frente a las elecciones del 2000, al punto de que casi gana la elección con mayoría absoluta. La pregunta aquí es por qué la caída en la aprobación a Fujimori, los errores y escándalos políticos asociados a la reelección, no se tradujeron en un mayor apoyo a las fuerzas de la oposición. Entender esto requiere analizar en detalle la campaña electoral del 2000, que se definió a lo largo de 1999. Ella ilustra con claridad la naturaleza de las organizaciones políticas de oposición.

LAS ELECCIONES DEL 2000: EL FUJIMORISMO COMO COALICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, LA DEBILIDAD DE LA OPOSICIÓN... Y EL COLAPSO DEL FUJIMORISMO³³

Los resultados de las elecciones del 2000 y las características de la campaña confirman los parámetros del análisis precedente: debilidad generalizada de los actores políticos, incluido el propio fujimorismo, una alta volatilidad electoral y, por tanto, un escenario abierto a varios desenlaces.

Los acontecimientos políticos alrededor de las elecciones del 2000 tienen a mi juicio etapas muy marcadas, que creo merecen cada una un análisis específico. La primera es la signada por la sorprendente recuperación del fujimorismo, y va entre inicios de 1999 hasta febrero del 2000. El promedio de aprobación a la gestión presidencial se elevó de un promedio de 39.83% en 1998, a un 45.5% en 1999 y, aún más, hasta 49.57% entre enero y julio del 2000. ¿Por qué la tendencia de crecimiento de

33 En esta parte sigo ideas expuestas en Tanaka, 2000a y 2000b.

la oposición y declive del fujimorismo cambió tan drásticamente a lo largo de 1999?

Sostengo que la respuesta a esta pregunta tiene tres partes. La primera, la más importante a mi juicio, tiene que ver con los límites de la oposición. La oposición construyó, desde el referéndum de 1996, una identidad negativa de Fujimori. Esto dejaba sin responder la pregunta sobre la opción a escoger más allá de Fujimori. Como señala Przeworski al estudiar las transiciones democráticas, de la crisis de legitimidad de un régimen autoritario no se deduce necesariamente un proceso de transición; para que éste se dé, es necesario que aparezca una opción alternativa clara. En el Perú, el desgaste de Fujimori se dio, pero nunca apareció una alternativa clara. Esto se hacía más evidente en el plano de la economía. Durante el período de crisis del fujimorismo, cuando los efectos de la recesión constituían la principal preocupación ciudadana, la oposición, centrada en el referéndum y en el tema de la reelección presidencial, esgrimía argumentos principistas en medio de un sumamente confuso debate jurídico.

En este terreno, el fujimorismo desarrolló una estrategia políticamente más sagaz, haciendo de la necesidad una virtud. En medio de la recesión puso en funcionamiento una política social destinada a atender a la población en situación de pobreza (alrededor de la mitad de la población), logrando que, en medio de la crisis, los más pobres, la mayoría del país, aprobaran relativamente más la gestión presidencial. En el cuadro 2 vemos que en el período electoral, entre enero de 1999 y abril del 2000, el porcentaje de aprobación en el sector "D" estuvo siete puntos por encima que el promedio general y 16 puntos por encima del porcentaje que se dio en el sector "B", expresivo de las clases medias.

El fujimorismo, a lo largo de su gobierno, aumentó notablemente los montos del gasto social. El gasto social per cápita pasó de 12 dólares en 1990 a 63 en 1993, a 75 en 1994, a 145 en 1995 y a 158 en 1996 (INEI), aumentando también sustancialmente como porcentaje del PBI, de modo que en el

segundo gobierno de Fujimori se registraron los niveles más altos de las últimas dos décadas. Así, entre 1997 y 2000, el porcentaje de peruanos que viven en extrema pobreza y que recibieron alimentos donados por el gobierno pasó de 71.4 a 75.5%.³⁴ En cuanto al gasto social con respecto al gasto público total, encontramos también una recuperación consistente respecto a la situación de 1990 (véase cuadro 6).

Cuadro 6: Relación del gasto social respecto al gasto público total (%)

Años	Gasto social / gasto público
1990	16.6
1993	25.9
1996	35.1
1999	28.4
2000	27.3
2001	26.7

Tomado de: O'Brien, 2001.

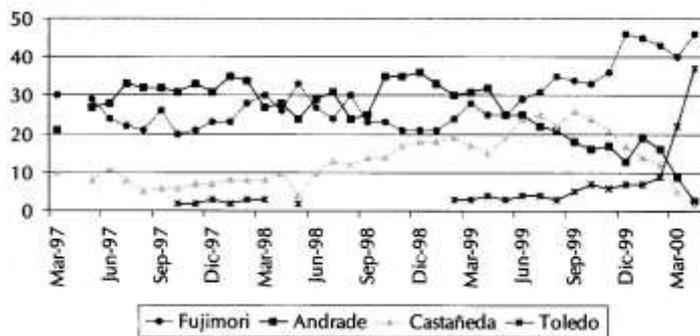
De este modo, si bien la mala situación económica melló la aprobación de la gestión de Fujimori, ella afectó relativamente menos su relación con los sectores populares; y en esos mismos sectores, mayoritarios, la oposición encontró más dificultades para ganar hegemonía, dado el carácter institucionalista de sus banderas de lucha, la ausencia de una propuesta económica y la dificultad para presentar una alternativa clara al fujimorismo.

A esto hay que sumar que la oposición se presentó dividida a las elecciones, sin una estrategia común, dispersando el voto en contra de Fujimori. A pesar de que la suma de los votos de los candidatos opositores se ponía gruesamente a la par frente al voto fujimorista (según las encuestas de intención de voto), aquellos no lograron gestar una alianza, como por ejemplo la Alianza en Argentina en la misma época. ¿Por qué?

34 El porcentaje de la población que vive en extrema pobreza respecto a la población total fue de 14.7% en 1997 y 14.8% en 2000. Datos tomados del Instituto Cuánto.

Creo que la explicación hay que encontrarla, de un lado, en el sistema electoral, y de otro, en la naturaleza de los movimientos políticos de oposición. Tenemos que la Constitución de 1993 (al igual que la de 1979), estableció que si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se debe ir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Pese a que Fujimori estaba bastante cerca de ganar con mayoría absoluta, muchos analistas vaticinaban que le sería imposible superar esa barrera. Esto hacía que para el conjunto de candidatos opositores, la pelea principal fuera la pelea por el segundo lugar; en un escenario de segunda vuelta, se confiaba que la suma de votos opositores superara a los fujimoristas. Y la pelea por el segundo lugar estuvo muy disputada entre mediados de 1999 hasta marzo del 2000, apenas un mes antes de las elecciones, como puede verse en el gráfico 4.

Gráfico 4: Evolución de la intención de voto, 1997 – 2000



Intención de voto, elecciones presidenciales del 2000, primera vuelta; datos de Apoyo para lima metropolitana. los datos del mes de abril del 2000 corresponden a los resultados oficiales nacionales de la elección del 9 de abril, y los pongo sólo como referencia. Todas las cifras están calculadas sobre el total de votos emitidos, que incluyen los votos en blanco y viciados.

Esto pudo ser posible también por la naturaleza de los movimientos de oposición. Se trató de movimientos nuevos, bastante débiles e inexpertos, sin perfiles definidos, para los cuales una pequeña representación parlamentaria bastaba como recompensa. Nuevamente, esta lógica resultaba estimulada por el sistema electoral: el Congreso se eligió en 1995 y 2000 en distrito único nacional, sin barreras de entrada, sistema altamente proporcional, en el que bastaba tener el 0.8% de los votos para acceder a un escaño.³⁵

Ciertamente, la recuperación del fujimorismo no sólo tiene que ver con los límites de la oposición. Cuentan también las acciones del gobierno. Existen algunos aspectos positivos que jugaron a su favor; entre los méritos del gobierno se puede mencionar una muy ligera reactivación económica a lo largo de 1999, la demarcación territorial después de la firma de la paz con Ecuador, la solución de algunos problemas fronterizos pendientes con Chile, la captura del principal líder de Sendero Luminoso todavía en libertad, el "camarada Feliciano", y otros.

La combinación de la debilidad de la oposición y los méritos del gobierno hicieron que pudieran tener éxito y resul-

35 Es reveladora la comparación entre la oposición peruana y argentina frente a Fujimori y Menem, respectivamente. Primero, el sistema electoral cuenta. En el Perú, para ganar en primera vuelta se necesita mayoría absoluta, resultado poco probable que pone en el centro de la agenda, la lucha por el segundo lugar. En Argentina puede ganarse en primera vuelta sin mayoría absoluta, lo que estimula la unidad de la oposición. Pero más importante que esto, mi hipótesis es que en Argentina el costo de quedar fuera del poder para un partido de la trayectoria del radical, con sólidas *constituencias* [bases sociales, N. del E.] que satisfacer, enfrentando la sombra de un peronismo que podría debilitarlo seriamente, resultó demasiado alto como para asumirlo. Además, para el radicalismo la Alianza resultaba atractiva porque podía encabezarla, dada su mayor fortaleza organizativa frente al FREPASO, movimiento nuevo y sin cobertura nacional. Para éste último, finalmente, precisamente por su novedad, acceder al gobierno nacional, aunque no fuera en una posición hegemónica, ya era ganancia. En el Perú, por el contrario, dada la precariedad de los movimientos opositores, una pequeña representación parlamentaria podía parecer recompensa suficiente.

tar creíble un conjunto de maniobras autoritarias y sucias por parte del régimen. Me refiero por supuesto al uso electoral de los recursos del Estado, al control de gran parte de la prensa, a las campañas de desprestigio por medio de la prensa amarilla y otros. Esta es la tercera parte de la explicación de por qué cambiaron en 1999, las tendencias políticas de los años previos, junto a los límites de la oposición y los méritos del gobierno. Si bien no se puede menospreciar el peso de este elemento, creo que no podría haber prosperado en otro escenario. No creo que sea adecuado hacer descansar la explicación en la pura manipulación, como si los ciudadanos fueran fácilmente manipulables. Como vimos, siempre estuvo presente un sentimiento crítico y una capacidad de reaccionar en contra de las iniciativas negativas del régimen, especialmente entre 1996 y 1998.

Como sea, las elecciones se desarrollaron de manera altamente irregular, por eso no se puede decir que ellas cumplirían con estándares internacionales que marcan elecciones "libres y justas". Ahora bien, las maniobras de desprestigio del régimen en contra de los principales candidatos opositores, si bien tuvieron éxito en debilitar progresivamente a los dos principales candidatos de oposición (Alberto Andrade y Luis Castañeda), tuvieron una consecuencia inesperada apenas unas semanas antes de las elecciones: el "fenómeno Toledo". Toledo subió sorprendente y vertiginosamente en intención de voto, apenas a 5 ó 6 semanas antes de la elección, de un 10% al 37% de los votos emitidos el 9 de abril (ver gráfico 4 y cuadros 7 y 8). En una muestra impresionante de autonomía por parte del electorado, prácticamente todo el voto de oposición se concentró rápida y espontáneamente en un solo candidato, alcanzando colectivamente la unidad que los líderes de oposición fueron incapaces de lograr y evitando la consolidación del fujimorismo. Esto muestra que había un voto opositor buscando una representación que la elite no supo darle, la cual se creó de manera espontánea.

¿Quién es Alejandro Toledo? Es otro personaje "independiente", economista de cierto perfil tecnocrático, que ya

había tentado sin éxito la presidencia en 1995.³⁶ Toledo encarnó la esperanza de renovación, pero sobre la base de una propuesta de centro: "continuar lo bueno del gobierno", corregir sus errores, poniendo énfasis en la creación de puestos de trabajo, sin encerrarse en temas institucionalistas.

Cuadro 7: Intención de voto presidencial, datos nacionales³⁷

	Oct. 1999	Ene. 2000	Feb.2000	Mar. 2000	9 de abril
Fujimori	36	41	39	38	46.0
Andrade	19	16	14	8	2.8
Castañeda	19	14	12	5	1.7
Toledo	6	7	10	27	37.0

Los resultados de la votación del 9 de abril son impresionantes: por la altísima votación de Fujimori, después de diez años de gobierno; por la votación por Toledo, totalmente inesperada, súbita y espontánea; y por la bajísima votación que obtuvieron los demás candidatos, que muestra una volatilidad extrema del voto opositor.³⁸ Revela, finalmente, que pese al autoritarismo y control del régimen, éste resultaba vulnerable en el escenario electoral.

36 En 1995, Toledo obtuvo el 3.2% de los votos presidenciales y su lista al Congreso el 4.1 %.

37 Los datos son tomados de las encuestas de intención de voto nacionales de la empresa APOYO. Los datos del 9 de abril son los resultados oficiales. Todas las cifras están calculadas sobre el total de votos emitidos, que incluyen los votos en blanco y viciados.

38 Se ha discutido mucho sobre la validez de estas cifras y se ha hablado insistente y generalizadamente de fraude. Mi opinión es que ello es simplemente erróneo. Esto no significa negar que el proceso electoral estuvo lleno de irregularidades, pues es de conocimiento público que se trató de unas elecciones que asumieron las características de un proceso organizado por un régimen autoritario, como hemos visto. A pesar de esto, los resultados citados no difieren sustancialmente de los conteos realizados por instituciones de observación electoral de incuestionable independencia, como Transparencia. Es decir, el día 9 de abril no se cometió un fraude grosero, aunque en general el conjunto del proceso haya estado viciado.

Estos resultados muestran, a pesar de todo, un fujimorismo muy sólido, apenas a décimas del triunfo por mayoría absoluta, según los votos válidos.³⁹ Sin embargo, la noche del 9 de abril fue la noche de la oposición, no del gobierno. Ello se debió a un hecho totalmente accidental: el 9 de abril, a las 4 de la tarde, todos los *exit polls* dieron como ganador a Alejandro Toledo (46% frente a un 42% de Fujimori, en promedio); pero a las 9 de la noche, las mismas encuestadoras, con información de las actas escrutadas, dieron un resultado inverso.⁴⁰ Esto generó la sensación de que se asistía a un cambio intencional de resultados, la desconfianza creció porque no hubo ninguna manera de fiscalizar el cómputo oficial de votos; por demás, lleno de irregularidades.⁴¹ Esta sensación de fraude desencadenó una movilización impresionante (no vista desde finales de la década de los años 80) y fuertes presiones externas, que en la práctica evitaron que el gobierno cayera en la tentación de ganar "en mesa" las centésimas que necesitaba para evitar una segunda vuelta. Así, la percepción que se estaba cometiendo de fraude permitió a Toledo convertirse en un gran referente de oposición, de alternancia, y consolidar el crecimiento aluvional ocurrido desde febrero.

39 Descontando los votos nulos y blancos, Fujimori quedó apenas a 13 centésimas de punto de ganar en primera vuelta.

40 ¿Por qué fallaron los *exit polls*? Además del hecho de que no son un instrumento infalible, se produjo un fenómeno de "voto oculto" o "vergonzante", ciertamente inesperado. Ya mencionamos que el voto fujimorista era más fuerte entre los más pobres y menos educados, por lo que el voto fujimorista aparecía como un voto menos razonado y por ello socialmente indefendible. Como sea, esta explicación me parece más convincente que la que señala que el *exit poll* es el resultado "real" mientras que el resultado de actas es el "fraudulento". Ver también nota 38.

41 Eduardo Stein, jefe de la misión de observación de la OEA, calificó el proceso de cómputo como una "caja negra" y señaló la noche del 9 de abril que "algo siniestro estaba pasando". Una de las muchas irregularidades cometidas en el proceso de cómputo es el que se registró por momentos: a mayor número de mesas escrutadas, disminuía el número absoluto de votos de algunos grupos políticos (de oposición, por supuesto).

Cuadro 8: Elecciones 2000 - Resultados oficiales

	Votación presidencial	Votación congresal	Número de escaños
Acción Popular	0.42	2.47	3
FREPAP	0.72	2.18	2
Avancemos	2.23	3.09	3
APRA	1.38	5.51	6
UPP	0.33	2.56	3
Perú 2000	49.87	42.16	52
Solidaridad Nac.	1.8	4.03	5
Somos Perú	3.0	7.2	8
Perú Posible	40.24	23.24	29
FIM	--	7.56	9

Una vez determinada la segunda vuelta, un Toledo inexperto, sin equipo, desbordado por los acontecimientos, que se encontró por accidente con un liderazgo que no construyó, tuvo que tomar grandes decisiones. Toledo enfrentó un dilema: se le abrieron dos caminos, a mi juicio incompatibles. De un lado, estaba un camino que llevaba simplemente a intentar ganar la elección, buscando seducir al votante medio y a quienes votaron por Fujimori en primera vuelta; el otro camino era radicalizarse, denunciar que hubo fraude en primera vuelta, que los resultados verdaderos eran los de los *exit polls* y no los oficiales, pedir desmontar el "andamiaje autoritario", apelar a la lucha y la movilización. Este camino, si bien consolidaba su liderazgo entre los opositores más radicales, lo alejaba del votante medio y de la posibilidad de ganar la elección. Toledo vaciló entre los dos caminos en las escasas semanas entre la primera y la segunda vuelta; primó en general el camino de la radicalización, y por eso, a mi juicio, Fujimori fue capaz de ganar la partida. La imagen de Toledo quedó identificada con una "línea dura" y con posiciones institucionalistas, dejándose de lado las preocupaciones centrales de la mayoría: empleo, desarrollo, combate a la pobreza. Es decir, la oposición cometió el mismo error de 1998. Así, días antes de la segunda vuelta (28 de mayo), todas las encuestas de opinión daban una ventaja de unos diez

puntos a Fujimori sobre Toledo, con un porcentaje de indecisos que mantenía cierto suspenso.

Poco tiempo antes de la segunda vuelta, la Misión de Observación de la OEA solicitó la postergación de la elección por sólo diez días, para poder verificar el *software* del cuestionado sistema de cómputo de votos, demanda realmente minimalista a la luz del conjunto de irregularidades registradas a lo largo de la campaña. Al gobierno le habría convenido la postergación, en tanto así hubiera legitimado el triunfo que le anticipaban las encuestas; sin embargo, la incertidumbre inevitable en procesos electorales disputados y el deseo de evitar una imagen de debilidad, lo llevaron a seguir adelante. Como respuesta, Toledo decidió retirar su candidatura. Así, llegamos a la votación del 28 de mayo, que se llevó a cabo con un solo candidato, sin la presencia de observadores nacionales y extranjeros, y sin personeros de oposición. Los resultados oficiales, de dudosa confiabilidad, dieron a Alberto Fujimori el 51.22% de los votos emitidos ya Alejandro Toledo el 17.68%; el voto anulado llegó a casi el 30% y la abstención llegó a un 17.22%, porcentaje ligeramente superior al registrado en la primera vuelta. En otras palabras, aún con estos datos poco confiables, los votos obtenidos por Fujimori y los que podemos interpretar como respaldando a Toledo resultaron bastante parejos.

Entre el 28 de mayo y el 28 de julio (fecha del "cambio de mando"), se abrieron tres frentes de batalla, por así decirlo: el internacional, el del Congreso y el de la movilización en las calles. La oposición jugó en los tres escenarios a cuestionar las elecciones y descalificar el triunfo de Fujimori.

En cuanto al escenario internacional, las disputas se dieron en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Winsor, Canadá. El gobierno peruano buscó el reconocimiento de la elección y la oposición la aplicación de la resolución 1080, prevista para casos de "interrupción violenta del orden constitucional". Pese a los grandes cuestionamientos que recibió, el gobierno consiguió su objetivo inmediato, aunque tuvo que

aceptar el establecimiento de una misión permanente de la OEA en el país, que buscara la "democratización".

En cuanto al Congreso, las cosas no parecían fáciles para *el régimen*. La *alianza* fujimorista, Perú 2000, obtuvo 52 escaños de 120. En teoría, la oposición tenía la mayoría. Se manejó incluso la posibilidad de una salida "a lo Bucaram" en Ecuador: declarar la vacancia de la presidencia, establecer un gobierno provisional y convocar nuevamente a elecciones. Sin embargo, antes de la instalación del nuevo Congreso, el fujimorismo ya había logrado elevar el número de sus congresistas de 52 a 64 (muchos de ellos acaso fueron comprados). Más todavía, el 27 de julio, en la elección de la nueva mesa directiva, la lista del oficialismo consiguió 70 votos y la de la oposición apenas 46. Detrás de esto está tanto la corrupción de congresistas por parte del régimen, como también la extrema debilidad de los nuevos movimientos políticos.⁴²

Finalmente, algunos pensaron que con la movilización ciudadana en las calles, el régimen podría tambalear; creo que dicho sentir fue el resultado de una combinación de ingenuidad y de una suerte de nostalgia "movimientista". En otro texto he argumentado sobre el fin del *movimientismo* en el Perú.⁴³ Es decir, ya no puede decirse que se construya poder real sobre la base de la movilización de sectores estratégicos de trabajadores, como en la década de los años 80. Con todo, se organizó la marcha de los "Cuatro Suyos", que dio lugar a manifestaciones importantes los días 26 y 27 de julio. El 28, sin embargo, mientras Fujimori prestaba juramento en el Congreso, en las calles del centro de Lima ocurrieron desmanes y sucesos violentos que terminaron con el saldo de seis muertos. Las movilizaciones no eran como en el pasado "movimientista": muy espontáneas, sin organización, sin capacidad de afectar la producción o la

42 Al ser "movimientos independientes", la disciplina interna es casi inexistente.

43 Ver Tanaka, 1998a. Durante los años del fujimorismo, puede hablarse de intentos sistemáticos por destruir las organizaciones sociales independientes que pudieran desafiar al gobierno.

provisión de servicios esenciales. Así, su capacidad de presión resultaba sólo simbólica.⁴⁴

En suma, creo que el gobierno había logrado, en lo básico, superar todos los obstáculos que enfrentó inmediatamente después de las elecciones e iniciar un tercer período de gobierno, aunque ciertamente acosado por una grave crisis de legitimidad y con una agenda democratizadora por delante seguida de cerca por actores internacionales. Fujimori seguía siendo el Jefe de Estado, aunque su liderazgo estuviera en cuestión, tanto en el frente interno como en el internacional. Muchos sectores se mostraron dispuestos a trocar el otorgamiento de legitimidad a un gobierno resultado de elecciones amañadas, a cambio de una promesa de democratización en un tiempo razonable.

A la luz del análisis precedente, ¿cómo entender entonces el colapso del fujimorismo? Creo que éste no puede deducirse de lo ocurrido en las elecciones y los conflictos postelectorales o de sus déficits de legitimidad, salvo como elementos contextuales. La caída de un régimen amparado en una lógica de poder no puede explicarse desde la legitimidad, tiene que explicarse también desde la lógica del poder. Yo sostengo que la caída se debe principalmente a factores externos (donde la intervención de los Estados Unidos ha sido decisiva), que precipitaron contradicciones internas del régimen.⁴⁵ Difícilmente la caída podría explicarse por la intervención de actores sociales y políticos internos, bastante débiles.

El misterio, aquí, es explicar el mensaje de Fujimori del 16 de setiembre del 2000, convocando a elecciones. Esto no puede explicarse por el video de Kouri y Montesinos, propa-

44 Basta mirar someramente la capacidad de presión de los movimientos sociales en Ecuador o Bolivia, o del sindicalismo argentino, para darse cuenta de la extrema debilidad de las protestas en el Perú y su eficacia sólo simbólica.

45 Ver Cotler, 2000. Ahí explora una línea argumental que enfatiza también el peso de factores externos.

lado dos días antes," ya que se trata de un régimen probablemente insensible al escándalo. De hecho, una investigación en esos días declaró inocentes a los involucrados. La clave hay que encontrarla en una conferencia de prensa realizada el 21 de agosto. En ella, Fujimori y Montesinos anunciaron el desbaratamiento de una red de traficantes que vendieron armas a las FARC en Colombia. En días posteriores se fue conociendo que altos mandos del ejército peruano, y el propio Montesinos, estarían directamente implicados en esta operación. Lo cual, por supuesto, ponía al régimen en contradicción abierta con los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región.

El escándalo marcó un cambio de facto en la política exterior del régimen que se proponía como aliado de los Estados Unidos en el plan Colombia. Esto desencadenó fuertes presiones norteamericanas sobre Fujimori para que aleje del poder a Montesinos, responsabilizado de estas maniobras. De este modo se produjo el divorcio entre Fujimori y Montesinos, se fracturó el núcleo mismo de los intereses en el poder, la entraña del régimen. Puesto Fujimori en curso de colisión con los Estados Unidos, habría tomado la decisión de desprenderse efectivamente de Montesinos, su socio durante diez años, y usarlo como chivo expiatorio para limpiar su imagen. Sin embargo, en el camino, Fujimori descubrió que Montesinos contaba con un sólido respaldo de la cúpula de la FFAA; más todavía, Montesinos preparó un contraataque: si es que el presidente se mantenía en la idea de sacarlo, podría responder con una suerte de golpe "institucionalista", que habría convocado a elecciones en seis meses o un año, tiempo suficiente para poner las cosas en orden y partir después al exilio dorado. Es decir, la figura cambiaba: Fujimori sería el chivo expiatorio.

Enfrentado Fujimori a la posibilidad de ser víctima de un golpe y usado como chivo expiatorio, se anticipó y anunció

46 En el video se observa al asesor presidencial entregando dinero en efectivo a un congresista de oposición (Alberto Kouri) para lograr su colaboración con el gobierno.

la convocatoria a elecciones. Esta sucesión de acontecimientos permite entender por qué Fujimori tomó una decisión de esa magnitud y absolutamente imprevista; sólo una situación límite la explica. Una vez hecho el anuncio el sábado 16, que marcó totalmente una nueva situación política, se llegó a un nuevo y precario equilibrio entre Fujimori, Montesinos y la cúpula militar. Fujimori se quedaba al mando del timón hasta el 28 de julio del 2001; Montesinos renunciaba al poder, pero ganaba cierta garantía de impunidad, mediante un asilo en Panamá, gestionado directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la OEA, a través de gestiones personales del Secretario General Gaviria (Montesinos viajó a Panamá alrededor del 24 de setiembre); pues a los Estados Unidos les interesaba alejar del poder a Montesinos, nada más. La viabilidad de este nuevo equilibrio tuvo como evento paradigmático el fracaso de la oposición en el Congreso en su intento de censurar a la mesa directiva gobiernista, el 12 de octubre. Cambiar de mesa directiva abría la posibilidad de declarar la vacancia de la Presidencia de la República, y ello no pudo ser alcanzado en ese momento. De hecho, líderes de la oposición tan importantes como Lourdes Flores y Fernando Olivera se pronunciaron por una transición encabezada por Fujimori, sin Montesinos.

Sin embargo, este equilibrio volvió a romperse, por la intervención de otras agencias norteamericanas como la DEA y la CIA, que boicotearon las gestiones de asilo en Panamá que realizaba el Departamento de Estado y, aparentemente, permitieron conocer la existencia de algunas cuentas bancarias secretas del ex asesor en Suiza y otros lugares. Esto obligó la vuelta de Montesinos al Perú (el 22 de octubre) y su posterior fuga y desaparición (aparentemente el 29 de octubre). Todos estos escándalos permitieron un cambio importante en la correlación de fuerzas. El 13 de noviembre, la oposición intentó nuevamente censurar a la mesa directiva del Congreso y esta vez tuvo éxito. Roto el núcleo del poder (Fujimori-Montesinos), éste empezó a desmoronarse. El 16 de noviembre, Valentín Paniagua fue electo Presidente del Congreso; esto abría la po-

sibilidad efectiva de declarar la vacancia de la presidencia o iniciar investigaciones en contra de Fujimori. El 20, Alberto Fujimori renunció a la presidencia desde el Japón y se quedó en el Oriente, para evadir sus responsabilidades. El 22 de noviembre, Paniagua juramentó como Presidente de la República, después de aceptadas las renuncias de los dos vicepresidentes.

Es impresionante ver cómo un fujimorismo tan fuerte pudo colapsar de una manera tan rápida, inesperada y estrepitosa. Ello fue posible porque, como vimos, el fujimorismo fue siempre una coalición de intereses heterogéneos y altamente dependientes de poderes personalizados, articulados gracias al acceso al clientelismo. Cayó porque factores externos desencadenaron contradicciones internas. Caída la cabeza, se desmoronó todo el cuerpo. Algo curiosamente parecido sucedió también con el desplome de Sendero Luminoso, ocurrido después de la captura de su líder Abimael Guzmán.⁴⁷

CONCLUSIÓN: APRENDIZAJE INCOMPLETO, TRAUMAS Y OPORTUNIDADES ABIERTAS

¿Qué perspectivas se abren hacia el futuro? De un lado, no hay muchas razones para ser optimistas. La caída del fujimorismo es más el resultado de sus contradicciones internas, en el contexto de una aguda crisis de legitimidad que dio lugar a movimientos de protesta espontáneos y desorganizados, no de la consolidación de una alternativa, no de la acción de una vigorosa fuerza social o política. Es una caída inesperada, imprevista y, por lo tanto, los actores políticos que protagonizan la actual transición aparecen débiles, desarticulados, improvisados. Además, la caída estrepitosa del fujimorismo los lleva a sobreestimar sus capacidades y a subestimar la naturaleza de los desafíos hacia delante. Se trata de reconstruir el país, pero en un contexto en el cual quienes deben reconstruirlo también deben ser reconstruidos.

⁴⁷ En Degregori, 2000, pueden encontrarse más similitudes entre el estilo de conducción del fujimorismo y el del senderismo.

Creo que podría decirse que las elites políticas en el Perú han pasado por un proceso de aprendizaje incompleto.⁴⁸ Es decir, cuando el desembozado autoritarismo del fujimorismo los llevaba a valorar la importancia de la democracia como régimen, cuando empezaban a valorar la importancia de la búsqueda de consensos para enfrentar los problemas, cuando se aprendía de la necesidad de mirar más allá del corto plazo, de construir una alternativa clara al fujimorismo, con énfasis en lo social, como resultado de una convergencia programática, el fujimorismo se desplomó estrepitosamente. Desaparecida la fuerza frente a la cual la oposición se empezaba a articular, nuevamente priman ahora tendencias a la dispersión y al enfrentamiento.

En medio de dificultades, el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua avanzó bastante en estabilizar la nación, terminar con las manifestaciones más escandalosas del pasado inmediato y avanzar hacia la institucionalización del país. Logró la realización de elecciones limpias, de las cuales salió un nuevo presidente con un mandato legítimo, Alejandro Toledo. Estas elecciones, a mi juicio, confirman el análisis precedente, que enfatiza la extrema debilidad de los actores políticos. Es sorprendente notar que apenas dos organizaciones participantes en las elecciones del 2000 participaron nuevamente en el 2001. La precariedad y volatilidad de las organizaciones políticas, la manera en que resultan sólo membretes electorales son impresionantes. Precisamente, las dos organizaciones participantes en el 2000 y en el 2001, protagonizaron la segunda vuelta de las elecciones del 2001: Perú Posible con Alejandro Toledo y el APRA con Alan García.

La vuelta de García como protagonista central de la vida política nacional merece un breve comentario. Creo que ella puede explicarse perfectamente como resultado de la extrema debilidad de sus rivales y de los enormes errores que cometieron durante la campaña. Es decir, un grado mínimo de consis-

48 Ver McCoy, 1999.

tencia partidaria marcó una diferencia fundamental en un país en el que los partidos son apenas etiquetas electorales. García se benefició, primero, por la manera en que se desplomó el fujimorismo. Favor con favor se paga: así como el caos del final del gobierno de García (y una ayuda personal de éste) permitieron el triunfo de Fujimori en 1990, los malos manejos y el grado de corrupción de éste último hicieron posible una lectura indulgente del período 1985-1990. A esos extremos hemos llegado. De otro lado, los errores de campaña de Toledo y Lourdes Flores resultaron fundamentales, sus ataques recíprocos ayudaron a crear la imagen de García "estadista" y a hacer creíbles sus llamados a la concertación. Finalmente, Fernando Olivera permitió que García llegara a segunda vuelta, quitándole a Flores los puntos necesarios para quedar segunda después de Toledo.⁴⁹

Respecto a Perú Posible, se trata de una organización improvisada, construida alrededor de un caudillo, Alejandro Toledo, quien como vimos se topó por accidente con un liderazgo no construido por él, sino otorgado por un sector muy importante de electores. Entre la primera vuelta del 2000 y la segunda del 2001, su movimiento no se consolidó como tal, sino que por el contrario siguió cambiando de orientaciones y utando según las conveniencias de la coyuntura.⁵⁰ La precariedad del liderazgo de Toledo y de su movimiento se hace patente ahora en las primeras semanas de su gobierno, caracterizado por la ausencia de iniciativas. Es notoria la diferencia del primer mes de este gobierno con el primer mes de los gobiernos de Fujimori, García, Belaúnde, Morales Bermúdez, Velasco o el primer gobierno de Belaúnde en la década de los años 60.

Vistas las cosas en perspectiva y mirando las últimas décadas, llama la atención en el Perú la extrema precariedad,

49 Es decir, no es necesario en absoluto recurrir a cuestionables explicaciones psicologistas que apelan a la "mala memoria" de los peruanos. Más que "mala memoria", se trata de malos análisis.

50 Ver, por ejemplo, la alta rotación de sus asesores personales en este período y las notorias diferencias políticas e ideológicas entre ellos.

indurabilidad y volatilidad de los actores políticos, así como los juegos que establecen entre ellos. Ni el gobierno militar en la década de los años 70 ni la democracia de la década de los años 80 ni el fujimorismo lograron construir órdenes estables. En la base de ello está ciertamente la debilidad del Estado, su vulnerabilidad frente a *shocks* externos y su dificultad para implementar algún tipo de política (*policy*) coherente, sea cual sea ésta. Durante gran parte del siglo XX, el Perú oligárquico constituyó un orden, injusto, pero orden al fin y al cabo. Desaparecido éste, destruidas sus bases de sostenimiento por el gobierno militar, se genera todavía un orden alternativo estable. La década de los años 80 representa la lucha por la hegemonía, por la reconfiguración del país una vez caído el viejo orden. Esta disputa terminó con la reestructuración neoliberal, que tampoco logró consolidarse, en gran medida por el personalismo, el sectarismo, la falta de visión y, finalmente, la corrupción del gobierno que encabezó este proceso.

En términos históricos, también hay, felizmente, tendencias que permiten albergar cierto optimismo. Si vemos las últimas décadas, encontraremos que nunca como ahora hay tanto consenso en torno a la importancia de la promoción y defensa de los valores democráticos, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Nunca antes hubo tanto grado de convergencia programática en torno al centro político en las propuestas de los principales actores, en torno al reconocimiento de los límites tanto del viejo modelo populista como del modelo neoliberal y la necesidad de reconstruir las capacidades de intervención del Estado, para hacer más competitiva la economía de mercado y reducir sus costos sociales.

He hablado de un aprendizaje incompleto; sin embargo, algo hemos aprendido, pero ha sido un aprendizaje por trauma, siguiendo las categorías de McCoy (1999). Un aprendizaje marcado por los escándalos de corrupción, por los altísimos niveles de prepotencia y autoritarismo que marcaron al fujimorismo. Los aprendizajes por trauma dan lugar a pactos políticos entre las elites políticas, y esos pactos pueden generar

estabilidad a corto plazo. El Perú no tendría porqué estar tan lejos de esta posibilidad. De hecho, el gobierno de Toledo intenta de algún modo gobernar por consenso, como queda claro al ver la composición de la Junta Directiva del Congreso y su primer Consejo de Ministros.

Sabemos que los aprendizajes por trauma, útiles para generar pactos a corto plazo, pueden generar problemas a mediano y largo plazo, dada la rigidez de los mismos y su dificultad para adaptarse a nuevas circunstancias. Las experiencias de Chile y Bolivia después de la transición, o los problemas que surgieron después del Frente Nacional en Colombia o después del pacto de punto fijo en Venezuela, son ilustrativos de ello. En el Perú, precisamente por la precariedad de los actores y lo inestable de la situación, podemos evitar esa situación y lograr pactos flexibles de permanente actualización. La situación es ciertamente complicada, pero también hay posibilidades abiertas. Como siempre, todo depende de las decisiones de los actores principales.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- AGÜERO, Felipe
1998 "Conflicting Assessments of Democratization: Exploring the Fault Lines". En: Felipe Agüero y Jeffrey Stark, eds.: *Fault Lines of Democracy in Post- Transition Latin America*. Miami, North-South Center Press.
- ARIAS, César
2001 "El gélido invierno del fujimorato". En: *Nueva Sociedad*, n.º 171, enero-febrero. Caracas, Nueva Sociedad.
- BALBI, Carmen Rosa
1997 "Le fujimorisme: délégation sous surveillance et citoyenneté". En: *Problèmes d'Amérique Latine*, n.º 25, avril-juin. Paris.
- BENDIX, Reinhard
1964 *Nation Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order*. New York, John Wiley and Sons.

- CARRIÓN, Julio
1999 "La popularidad de Fujimori en tiempos ordinarios, 1993, 1997". En: Fernando Tuesta, ed., *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima, Fundación Friedrich Ebert.
- COLLIER, Ruth, y David COLLIER
1991 *Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. Princeton, Princeton University Press.
- COTLER, Julio
1994 "Crisis política, *outsider s* y autoritarismo plebiscitario: el fujimorismo". En: *Política y sociedad en el Perú: cambios y continuidades*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
1995 "Political parties and the problems of democratic consolidation in Peru". En: Mainwaring, Scott, y Timothy Scully, eds.: *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*. California, Stanford University Press.
1999 *Drogas y política en el Perú. La conexión norteamericana*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
2000 "La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia". En: Julio Cotler y Romeo Grompone: *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- DEGREGORI, Carlos Iván
2000 *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- DEGREGORI, Carlos Iván y Romeo GROMPONE
1991 *Elecciones 1990: Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

- ENCARNACIÓN, Omar
2000 "Beyond Transitions. The Politics of Democratic Consolidation". En: *Comparative Politics*, vol. 32, n.º 4, julio.
- GAMARRA, Eduardo y James MALLOY
1995 "The Patrimonial Dynamics of Party Politics in Bolivia". En: Mainwaring, Scott, y Timothy Scully, eds.: *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*. California, Stanford University Press.
- GERVASONI, Carlos
1997 "La sustentabilidad electoral de los programas de estabilización y reforma estructural: los casos de Argentina y Perú". Ponencia presentada en el XXº Congreso del Latin American Studies Association, Guadalajara, México.
- GONZALES DE OLARTE, Efraín y Lilian SAMAMÉ
1991 *El péndulo peruano. Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- GROMPONE, Romeo
2000 "Al día siguiente: el fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y social". En: Julio Cotler y Romeo Grompone: *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- KAY, Bruce
1995 "Fujipopulism and the Liberal State in Peru, 1990-1995". Ponencia presentada en el Congreso del Latin American Studies Association. Washington D.C., 28-30 setiembre.
- KENNEY, Charles
2000 "The Collapse of the Peruvian Party System: Cleavages, Institutionalization, and Political Elites". Texto inédito.

- LEBOW, Richard
2000 "What's So Different About a Counterfactual?". En: *World Politics*, n.º 52, julio.
- LINZ, Juan, y Alfred STEPAN
1996 *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996.
- LÓPEZ, Sinesio
1992 "Fujimori y la crisis de la civilización del siglo XX". En: Abugattás et. al.: *Desde el límite. Perú, reflexiones en el umbral de una nueva época*. Lima, Instituto Democracia y Socialismo.
- LYNCH, Nicolás
1999 *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980-1992*. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- McCOY, Jennifer
1999 "Comparative Lessons". En: Jennifer McCoy, ed.: *Political Learning and Redemocratization in Latin America: Do Politicians Learn from Political Crisis?* Miami, North-South Center Press.
- O'BRIEN, Eduardo
2001 "Informe sobre programas sociales". Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Lima, PROMUDEH.
- O'DONNELL, Guillermo
2000 "Democracy, Law, and Comparative Politics". Working Paper n.º 274. The Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.
- PEASE, Henry
1999 *Electores, partidos y representantes. Sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno en el Perú*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

- QUIJANO, Aníbal
2000 "La alternativa: gobierno provisional de los concejos municipales". En: *Nueva Sociedad*, n.º 168, julio-agosto. Caracas.
- ROBERTS, Kenneth.
1995 "Neoliberalism and the transformation of populism in Latin America. The peruvian case". En: *World Politics*, vol. 48, n.º 1, octubre.
- ROSPIGLIOSI, Fernando
2000 *Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- SCHMIDT, Gregory
1996 "Fujimori's 1990 Upset Victory in Peru: Electoral Rules, Contingencies, and Adaptative Strategies". En: *Comparative Politics*, vol. 28, n.º 3, abril.
1999 "Crónica de una reelección". En: Fernando Tuesta, ed., *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima, Fundación Friedrich Ebert.
- TANAKA, Martín
1998 *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
1998a "From Movimientismo to Media Politics: The Changing Boundaries between Society and Politics in Fujimori's Peru". En: John Crabtree y Jim Thomas, eds., *Fujimori's Peru: The Political Economy*. Institute of Latin American Studies, University of London.
1999 "La consolidación democrática en América Latina y la importancia de la competencia política. Lecciones desde la experiencia peruana". En: Fernando Tuesta, ed., *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima, Fundación Friedrich Ebert.
1999a "Los partidos políticos en el Perú, 1992-1999: estatalidad, sobrevivencia y política mediática". Documento de Trabajo n.º 108. Lima, Instituto de Estudios Peruanos - The Japan Center for Area Studies, 1999.

- 2000 "Perú, las reformas de segunda generación y las elecciones del 2000: un guión sin actores". Trabajo presentado en la conferencia *Post-Reform Elections in Latin America: Bringing Politics Back In*. The Paul H. Nitze School for Advanced International Studies, Johns Hopkins University. Washington D.C.
- 2000a "Los partidos políticos y el fujimorismo, 1992-1999, y las elecciones del 2000. ¿Hacia un cambio de régimen?" En: *Perfiles Latinoamericanos*, año 9, n.º 16, junio 2000. México D.F.
- 2000b "Perú. Elecciones - 2000 y los conflictos poselectorales". En: *Nueva Sociedad*, n.º 69, setiembre-octubre. Caracas.

TOURAINÉ, Alain

- 1989 *América Latina. Política y Sociedad* (1988). Madrid, Espasa-Calpe.

VEGA CENTENO, Imelda

- 2000 "Drama o sainete en dos vueltas". En: *Nueva Sociedad*, n.º 168, julio-agosto. Caracas.

WEYLAND, Kurt

- 1996 "Neo-Populism and Neo-Liberalism in Latin America: Unexpected Affinities". En: *Studies in Comparative International Development*.

Diagramado en
 el *Instituto de Estudios Peruanos* por
 Gabriela de Amat H.
 Impreso en los talleres gráficos de
Offset Centro S.R.L.
 Av. Militar 1610, Lince
 Teléfono 471-2609

Colección *mínima*

38. Antonio Zapata y Juan Carlos Sueiro
Naturaleza política: el gobierno y el fenómeno del Niño en el Perú, 1997-1998, 1999, 108 pp.
39. Efraín Gonzales de Olarte
Neocentralismo y Neoliberalismo en el Perú, 2000, 123 pp.
40. Stephen Smith y Carolina Trivelli
El consumo urbano de los alimentos andinos tradicionales en el Perú, 2001, 87 pp.
41. Carolina Trivelli
Buscando clientes: barreras al crédito agrario en el Perú, 2001.
42. Patricia Ames
¿Libros para todos? Maestros y textos escolares en el Perú rural, 2001.
43. Daniel Mora, Fernando Rospigliosi, Samuel Abad y Carlos Basombrio.
Las Fuerzas Armadas en la transición democrática en el Perú, 2001, 98 pp.
44. Martín Tanaka
Participación popular en políticas sociales, 2001, 82 pp.
45. Heraclio Bonilla
Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, 2001, 195 pp.
46. Jürgen Golte
Culturas..., 2001, 144 pp.

IEP
BIBLIOTECA



02154

IEP

anos